



# INTRODUCCIÓN

***La distribución espacial de la población del Cauca pone de presente el predominio de los asentamientos rurales, característica que coincide con el énfasis de la economía centrada en el sector agrario.***

En el departamento del Cauca si bien los conflictos han estado fuertemente ligados a la defensa de la tierra, hoy también se expresan en la lucha por la autonomía de las culturas indígenas; el reconocimiento de derechos por las negritudes; la profunda heterogeneidad económica; la deficiencia de servicios públicos; la irrupción del narcotráfico; y el escalamiento del conflicto armado. Entre estos conflictos se destaca el que se genera por la presencia de los actores armados que por tres décadas han estado en contradicción con las comunidades indígenas que se rigen por un orden autónomo y habiéndose constituido en un fuerte movimiento social han logrado a partir de los años noventa una muy importante representación política a nivel local y nacional, lo cual introduce un factor de mayor complejidad frente a otras regiones del país donde éste no es el común denominador.

La gran diversidad étnica en el departamento tiene su origen principalmente en los pueblos prehispánicos, en los españoles que allí se establecieron y en los negros traídos como esclavos del África occidental. De tal suerte que del total de los habitantes, aproximadamente 20% son indígenas, 30% afrocolombianos y el resto está conformado por mestizos y blancos.



Entre la actual población indígena los grupos más notables son los Páez en el norte y en el oriente, Guambiano en el oriente, Yanacona en el suroriente, Embera en el noroeste, Coconuco en el oriente e Inga en el sur del territorio; organizados en la figura política de los resguardos, donde los cabildos son la máxima autoridad. Las negritudes por su parte se encuentran concentradas principalmente en la faja del litoral Pacífico, donde se ubica el mayor número de comunidades y pobladores.

La distribución espacial de la población del Cauca pone de presente el predominio de los asentamientos rurales, característica que coincide con el énfasis de

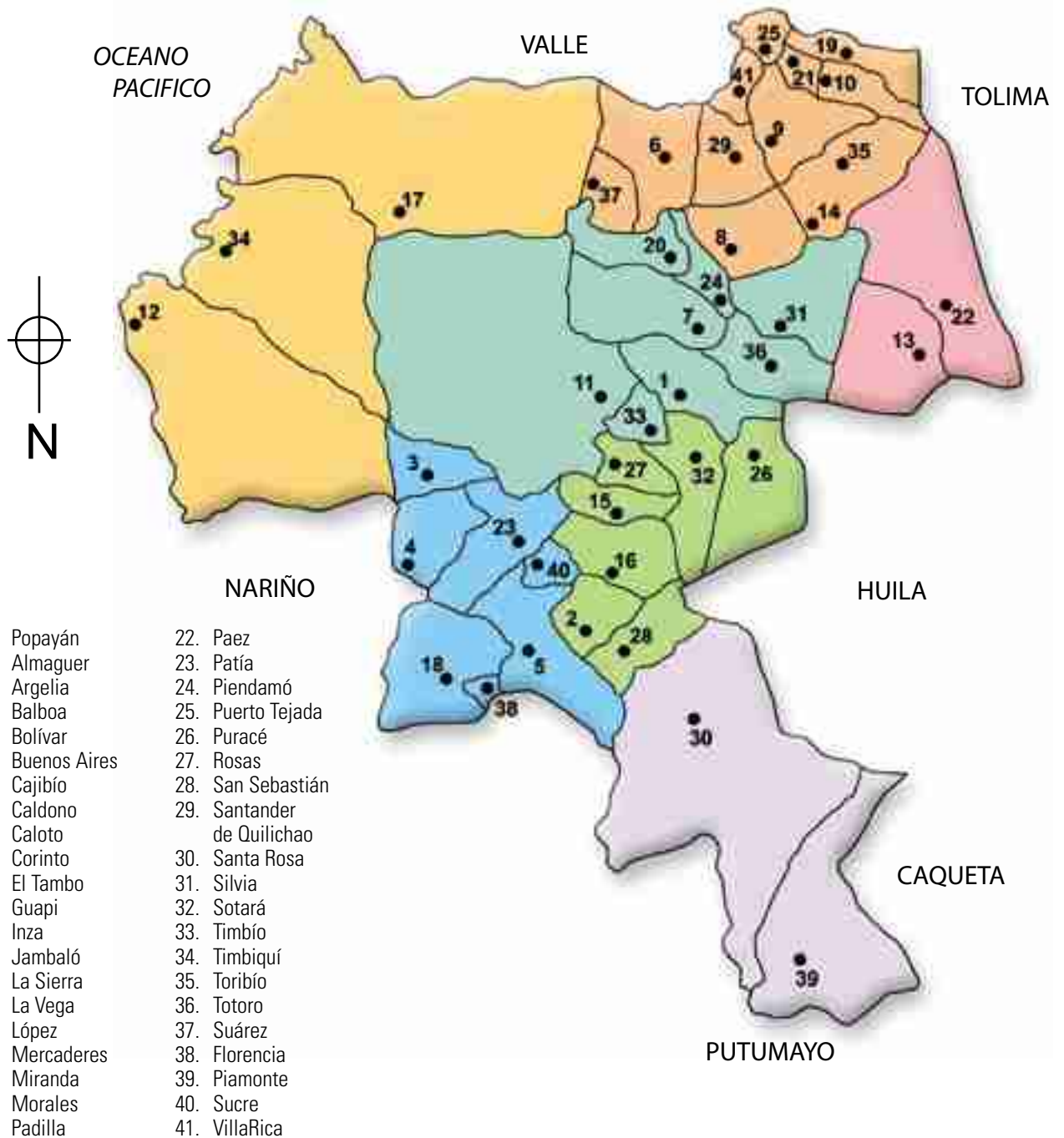
la economía centrada en el sector agrario. Según datos del censo de 1993, la proyección para el 2003 corresponde a 1.342.836 habitantes de los cuales 36% correspondían a las cabeceras municipales y 64% al sector rural. La dinámica poblacional en las siete regiones en que se divide el departamento muestra comportamientos diferentes: las regiones oriental, occidental y norte, a nivel agregado, crecieron a un ritmo superior al observado a nivel departamental. Este comportamiento revela el alto poder de absorción de población de estas regiones en el período reciente, mientras que las regiones central, Macizo, sur y la correspondiente a la Bota Caucana son expulsoras.





### SUBREGIONES

- ZONA NORTE
- ZONA CENTRO
- ZONA OCCIDENTE
- SUR
- BOTA CAUCANA
- ZONA ORIENTE
- MACIZO



- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 1. Popayán      | 22. Paez                   |
| 2. Almaguer     | 23. Patía                  |
| 3. Argelia      | 24. Piendamó               |
| 4. Balboa       | 25. Puerto Tejada          |
| 5. Bolívar      | 26. Puracé                 |
| 6. Buenos Aires | 27. Rosas                  |
| 7. Cajibío      | 28. San Sebastián          |
| 8. Caldon       | 29. Santander de Quilichao |
| 9. Caloto       | 30. Santa Rosa             |
| 10. Corinto     | 31. Silvia                 |
| 11. El Tambo    | 32. Sotará                 |
| 12. Guapi       | 33. Timbío                 |
| 13. Inza        | 34. Timbiquí               |
| 14. Jambaló     | 35. Toribío                |
| 15. La Sierra   | 36. Totoro                 |
| 16. La Vega     | 37. Suárez                 |
| 17. López       | 38. Florencia              |
| 18. Mercaderes  | 39. Piamonte               |
| 19. Miranda     | 40. Sucre                  |
| 20. Morales     | 41. Villa Rica             |
| 21. Padilla     |                            |

MAPA 1

Fuente: CIDSE - UNIVERSIDAD DEL VALLE  
 Procesado y georreferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH,  
 Cartografía IGAC-DANE.





La heterogeneidad, dispersión y poca articulación de la producción en el Cauca, junto a la ubicación de la agricultura moderna en los municipios que conforman la zona norte, permiten identificar un departamento en el que los beneficios del crecimiento económico no se irradian de manera uniforme en el conjunto del mismo. La concentración industrial en el norte del departamento deriva de la articulación con la producción de azúcar y papel del Valle del Cauca, a su vez determina que la región y el departamento presenten una alta dependencia de los cultivos agroindustriales. El aislamiento y la poca dotación de infraestructura que caracterizan al departamento, refuerzan la consolidación de un patrón de desarrollo que impide que las regiones con menores ventajas alcancen un mejor desempeño socioeconómico<sup>1</sup>.

Pese a la reconocida precariedad social y económica de los habitantes, se advierte en los últimos años que la satisfacción de las necesidades básicas ha mejorado. La tasa de analfabetismo para la población de 15 y más años es de 21,34%. La cobertura en servicios es: acueducto 51,4%, alcantarillado 40,1%, energía eléctrica 57,5%. El porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas es de 56,2% y el 32% se encuentra en condiciones de miseria.<sup>2</sup> Exceptuando la región norte, en las restantes la incidencia de la pobreza ha sido mayor.

Hacia mediados de la década de los años 80, las bonanzas coquera y amapolera introdujeron efectos deformantes sobre la estructura social, los patrones de vida tradicionales, los procesos de selección y distribución de tierras de cultivo y la

formación de mercados de trabajo. Así mismo, las distorsiones se expresaron en el desmedido consumo de mercancías entre las que ocupan lugar primordial las armas y el alcohol. Los más beneficiados con la economía ilegal no han sido las poblaciones vinculadas a los cultivos, en razón a que los excedentes económicos no se quedan en la región, sino que son trasladados por los intermediarios y comerciantes a otras localidades y apropiados por los grupos armados ilegales. En la actualidad se estima que en el 63% de los municipios existen cultivos de ilícitos, en una extensión aproximada en 10.000 has.<sup>3</sup>

En el departamento tienen presencia tanto las guerrillas, FARC y ELN, como muy variadas organizaciones de auto-defensa que luchan por el control de territorios y por ampliar su poder. En el pasado, el M-19 y el Quintín Lame tuvieron fuerza pero se desmovilizaron a principios de los noventa y sus espacios fueron ocupados por las FARC y el ELN. El Quintín Lame (1984-1991) constituye la única experiencia en Colombia de un movimiento de resistencia armada con una clara identidad surgida del movimiento indígena, en el momento en que finaliza el proceso de recupera-

<sup>1</sup> ESCOBAR, Jaime Humberto, *Apertura económica y ley Páez en el departamento del Cauca: análisis del impacto socioeconómico a corto plazo. En cuatro ensayos de coyuntura: Valle y Cauca a fines del siglo veinte. CIDSE y CEREC, 2003.*

<sup>2</sup> Para más detalles sobre este particular ver documento de ESCOBAR, Jaime Humberto, *Apertura económica y ley Páez en el departamento del Cauca: análisis del impacto socioeconómico a corto plazo. En cuatro ensayos de coyuntura: Valle y Cauca a fines del siglo veinte. CIDSE y CEREC, 2003.*

<sup>3</sup> La Gobernación del Cauca a través de la Secretaría de Gobierno ha venido adelantando un trabajo muy importante de monitoreo del conflicto armado y las violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario a nivel regional, que se puede consultar en una de sus publicaciones más recientes para el periodo 2001-2003.





ción de tierras comunales como respuesta a la agresión desatada contra las comunidades y sus dirigentes por múltiples enemigos. El contraste entre esta guerrilla y las que se mantienen hoy activas en el Cauca es muy claro, por cuanto estos últimos carecen de una interlocución sólida con las bases que dicen representar, mientras que en el Quintín Lame la relación con su base social determinó la profundidad y los alcances de la acción militar y llevó a la disolución del aparato armado cuando éste se convirtió en un obstáculo para la organización indígena. Fue así como la desmovilización de la estructura militar facilitó que la organización indígena, ante los cambios en el régimen político producidos a partir de los años noventa, avanzara con gran éxito por las vías institucionales.<sup>4</sup>

En el trasfondo del escalamiento del conflicto y la agudización de la violencia se encuentra la competencia entre los actores armados por el control de los cultivos ilícitos y los corredores estratégicos. Persiguiendo estos objetivos los grupos de autodefensa y las guerrillas han atacado directamente a la población civil y esto ha incidido en el aumento en los índices de violencia por momentos y en zonas específicas del departamento.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ver sobre el particular la tesis de Maestría de Ricardo Peñaranda Superlano, "Historia del movimiento armado Quintín Lame". Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1998.

<sup>5</sup> La Gobernación del Cauca a través de la Secretaría de Gobierno ha venido adelantando un trabajo muy importante de monitoreo del conflicto armado y las violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario a nivel regional, que se puede consultar en una de sus publicaciones más recientes para el periodo 2001-2003.

El impacto humanitario del conflicto armado tiene su momento más crítico en la ofensiva de los grupos de autodefensa a partir del año 2000 y con mayor intensidad en 2001, con el aumento de los asesinatos selectivos, las masacres y los homicidios. Por medio del empleo sistemático de la violencia dirigida cuidadosamente sobre objetivos específicos los grupos de autodefensa, que entraron por el norte del departamento y extendieron su presencia en algunas áreas del Macizo colombiano, del centro, así como del sur, establecieron control sobre algunos cascos urbanos y tramos de la carretera Panamericana. El departamento es un territorio en disputa, con riesgos crecientes para la población ante la inminencia de la intensificación de la guerra, tal y como se analizará detalladamente en el presente estudio.

# ACTORES DEL CONFLICTO ARMADO Y EL MOVIMIENTO INDÍGENA DE RESISTENCIA

**La actual etapa de resistencia indígena que se inicia en 1999, se caracteriza por la participación masiva de población local, incluyendo a las autoridades civiles y en algunos casos religiosas**

El historiador Ricardo Peñaranda, ha señalado cómo por razones geográficas, históricas y sociales el Cauca ha sido uno de los territorios con mayor presencia guerrillera en el país, al punto que casi todas las organizaciones alzadas en armas que han operado en Colombia han tratado de arra-

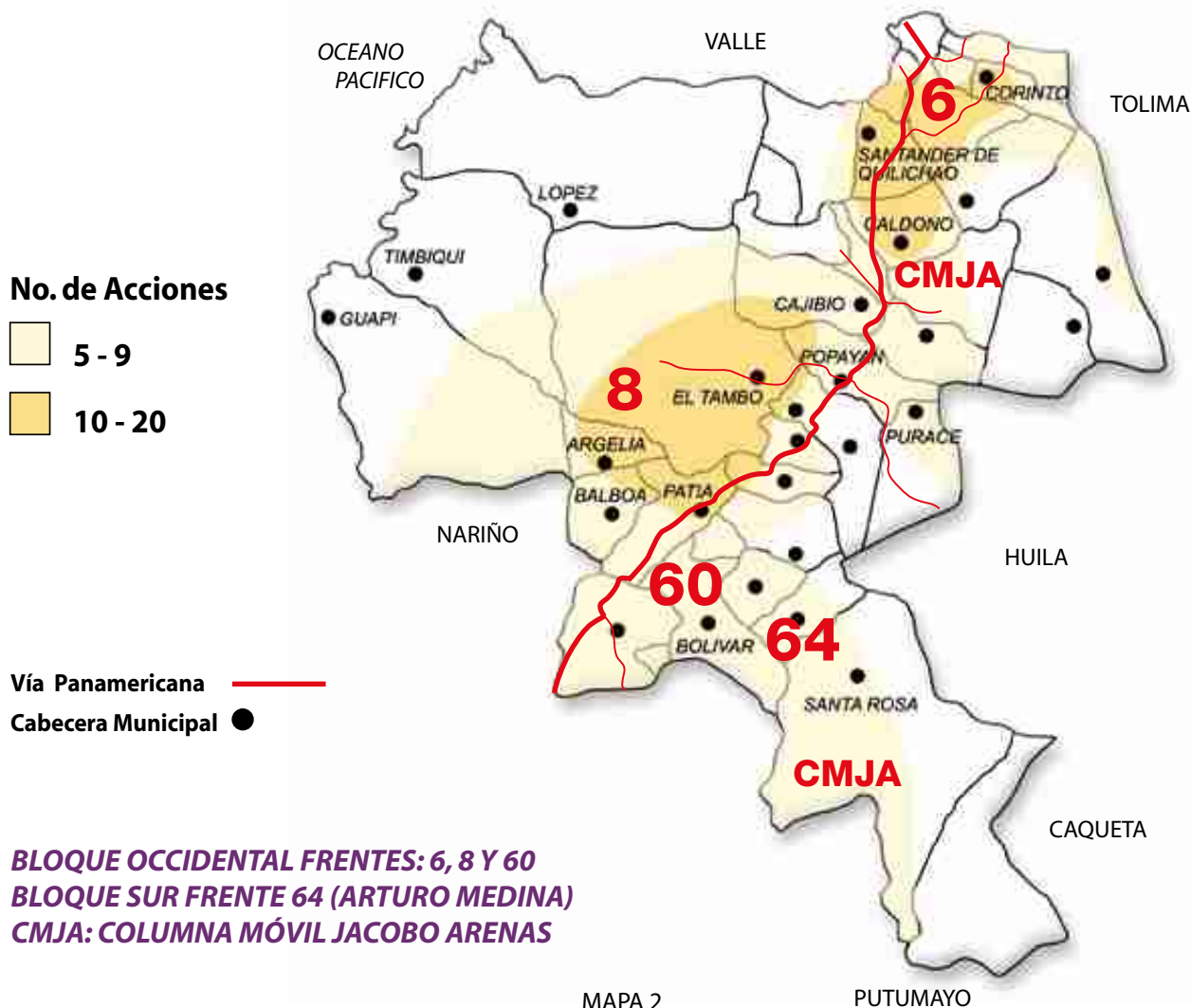
garse en este escenario. Entre los factores que han favorecido la implantación de los protagonistas del conflicto interno en esta región del suroccidente colombiano, se destaca que el departamento se ha configurado como un espacio esencial en los desplazamientos de la guerrilla, por cuanto convergen allí corredores

entre la Amazonía y el Océano Pacífico, el Ecuador y el Valle del Cauca, así como la diversidad de su geografía con valles interandinos y selvas, que se extienden desde la Cordillera Central hasta el Pacífico. Las principales zonas donde estos grupos al margen de la ley tienen presencia actualmente son: el norte que





## PRESENCIA DE LAS FARC 1998-2003



Fuente: Base de Datos de la Presidencia de la República y Boletín de DAS  
 Procesado y georreferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH,  
 Cartografía IGAC-DANE.

comunica con Valle, Tolima y Huila; la Bota Caucana que comunica con el departamento de Caquetá y con Putumayo; el Macizo que comprende también algunos municipios de los departamentos de Tolima, Huila, Nariño, Putumayo y Caquetá; la vía Panamericana que atraviesa el departamento desde Nariño hasta el Valle; la zona noroccidental – río Naya, que a través del río San Juan y

más arriba por el río Atrato, comunica con el municipio de Buenaventura (Valle) y el departamento del Chocó (Pacífico); la cordillera Occidental, en los municipios de El Tambo, Argelia, Patía, Balboa y el piedemonte de la cordillera Central, especialmente los municipios de Mercaderes y Bolívar (zona de enclave cocalero), la zona del Pacífico, primordial para el tráfico de armas y de drogas;

así como Popayán y sus alrededores, eje administrativo del departamento.

Las Farc, que actúan desde el comienzo de los años sesenta, coincidiendo con el nacimiento de la organización, protagonizaron en 1.964 una de sus primeras acciones armadas con la toma a Inzá, población localizada en el corazón del territorio indígena del Cauca. En la ac-



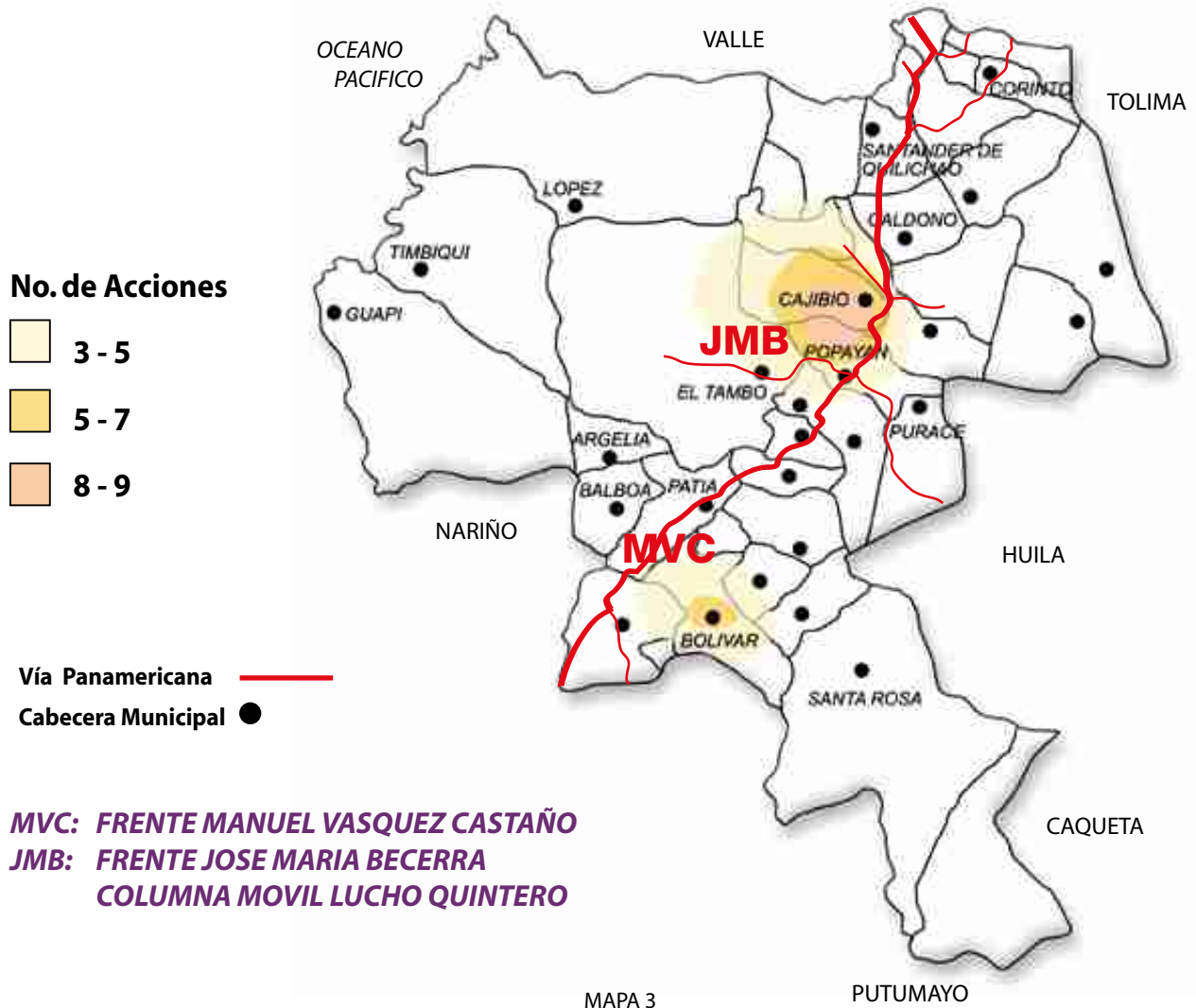


tualidad esta guerrilla opera a través de cuatro frentes del Comando Conjunto de Occidente. En el norte y el nororiente, en límites con el Valle del Cauca, tiene presencia el frente 6 que ha actuado recientemente en los municipios de Santander de Quilichao, Miranda, Píndamó, Silvia, Toribío, Jambaló y Caldono, principalmente; no obstante tiene tam-

bién incidencia en Buenos Aires, Cajibío, Caloto, Corinto, Inzá, Morales, Padilla, Páez, Puerto Tejada, Páez y Puracé. Hacia el centro y sur, en límites con Nariño y particularmente en la zona de cordillera, están los frentes 8, 60 y 64. El 8 se concentra en El Tambo, Argelia, Timbío, Balboa, Patía, Mercaderes, Bolívar, Almaguer, La Sierra, Rosas y Argelia. El

60, tiene presencia sobretodo en la región sur y cubre desde Almaguer hasta Argelia, pasando por Balboa, Patía, Bolívar y Mercaderes. Finalmente el 64, tiene presencia hacia la Bota Caucana, donde también ha operado la columna móvil Jacobo Arenas, en los municipios de Santa Rosa, Bolívar y Florencia. Así mismo se registran desplazamientos del

### PRESENCIA DEL ELN 1998-2003



Fuente: Base de Datos de la Presidencia de la República y Boletín de DAS  
Procesado y georreferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH,  
Cartografía IGAC-DANE.





frente 13 desde el departamento de Huila.

En cuanto al Eln, operan dos estructuras pertenecientes al frente de guerra Suroccidental. El frente Manuel Vásquez Castaño tiene presencia en el sur y la Bota Caucana en Almaguer, Rosas, San Sebastián, Bolívar, La Vega, La Sierra, Santa Rosa, Timbío y Florencia. A su turno, el frente José María Becerra tiene presencia en Cajibío, Morales, Patía, Piendamó, Buenos Aires y Popayán. Recientemente recibió, por el norte, alguna influencia de la columna móvil Lucho Quintero, que viene operando en los Farallones de Cali, en el departamento del Valle y la columna Milton Hernández con presencia en El Tambo.

La presencia de las autodefensas en el Cauca ha sido especialmente importante hacia finales de la década del noventa a través del bloque Calima en municipios del norte que registran continuidad con la dinámica del departamento del Valle. El denominado bloque Farallones ha fortalecido sus bases en Buenos Aires, Caldone, Cajibío y Santander de Quilichao. Estas agrupaciones que mantienen una fuerte relación con narcotraficantes del Valle, han operado en el norte del Cauca sobre la franja que separa las cordilleras Occidental y Central desde Miranda, Corinto y Caloto, en el extremo norte. Esporádicamente se han desplazado hasta Mercaderes, Bolívar, Patía y Argelia en el extremo sur, pasando por Morales, Cajibío, Popayán, El Tambo, Timbío, Rosas, La Sierra y en general los municipios ubicados en el eje de la carretera Panamericana. Así mismo, a través del frente Pacífico entraron a disputarle a las Farc la influencia sobre la costa hacia finales de 2001 y el se-



gundo trimestre de 2002. En este propósito obligaron a las comunidades negras a desplazarse de López de Micay y Timbiquí hacia Guapi. La tendencia registrada en 2003 y comienzos de 2004 muestra una reducción muy significativa en el accionar de estos grupos, sin embargo en el sur del departamento vienen cometiendo acciones de pillaje e intimidación contra la población en Sucre, Florencia y Bolívar.

Hacia finales de 2003 en el corregimiento de Ortega, jurisdicción del municipio de Cajibío, se produjo la desmovilización de 150 miembros de las Autodefensas Campesinas del Cauca. En el marco del proceso que el Gobierno adelanta con estas organizaciones a nivel nacional se llegó a un acuerdo con alias 'Franco', comandante de este grupo con vieja influencia en esta región del país, y líderes campesinos de la zona, con quienes se pactó la dejación de armas y algunas de las condiciones para la desactivación definitiva del grupo ilegal.

Un rasgo para destacar en el departamento del Cauca es la estrecha relación que ha existido entre el crecimiento de los cultivos ilegales y la expansión de la presencia de los grupos armados al margen de la ley. En el caso de las guerrillas, sobretodo de las Farc y en menor medida el Eln, los cultivos de ilícitos no sólo son fuente de finanzas sino que en la medida en que generan múltiples conflictos, les permiten a los grupos subversivos abrogarse las funciones que le competen al Estado, tal como la administración de justicia entre otros. Municipios que han registrado cultivos de amapola y presencia de las guerrillas son Toribío, Páez, Jambaló, Silvia y Totoró, en el nor oriente; Argelia, Balboa, Patía, La Sierra, La Vega, Almaguer, Bolívar, Mercaderes, San Sebastián y Santa Rosa, en el sur y la Bota Caucana.

Las autodefensas, de su lado, no sólo han derivado importantes recursos financieros de los cultivos de ilícitos sino que al mismo tiempo han amparado la





## PRESENCIA DE LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA 1998-2003



MAPA 4

Fuente: Base de Datos de la Presidencia de la República y Boletín de DAS  
Procesado y georreferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH,  
Cartografía IGAC-DANE.

expansión territorial del narcotráfico. Su presencia y actuación en los municipios ya citados del norte del departamento no sólo coincide con zonas de cultivos de amapola, sino con compras de tierras por parte de narcotraficantes. Ejemplos de municipios con esta problemática y actuaciones de las autodefensas han sido Miranda, Corinto, Caloto, Buenos Aires,

Silvia e incluso Popayán. La lógica supone la legalización de las ganancias obtenidas en el negocio ilícito, así como la expansión del mismo que mediante la compra de nuevas tierras permite la instalación de laboratorios para el procesamiento de la droga. Un ejemplo clásico del proceso de compra de tierras por parte de nuevos agentes, que apro-

vecharon los tradicionales conflictos por la tierra, es proporcionada por la masacre ocurrida en la hacienda El Nilo, municipio de Caloto, a inicios de la década del noventa. Dicha finca se hallaba ocupada por indígenas, estando pendiente un litigio con los propietarios. Los dueños vendieron la finca a narcotraficantes quienes a través de un abo-







gado amenazaron a los indígenas. Las amenazas se cumplieron el 17 de diciembre de 1991, cuando un grupo de hombres armados asesinó a 20 indígenas.

La rápida incursión de las Farc y el Eln al territorio indígena del Cauca, una vez se produjo la desmovilización del Quintín Lame, anticipó el deterioro en las tradicionalmente conflictivas relaciones entre las comunidades y los actores armados que han dado muestras inequívocas de estar poco inclinados a respetar formas tradicionales de organización y menos aún a tolerar que escapen a su control. Sin embargo, en este contexto es de la mayor importancia destacar la capacidad de respuesta que las comunidades indígenas particularmente del nororiente del Cauca han desarrollado para contener a los grupos armados.

La actual etapa de resistencia indígena que se inicia en 1999, se caracteriza por la participación masiva de población local, incluyendo a las autoridades civiles y en algunos casos religiosas; el empleo de recursos simbólicos sin armas; la manifestación expresa del rechazo de la población frente a los daños que pretendían ocasionar los atacantes contra bienes públicos; la expresión por medio de gritos e insultos del sentimiento de desaprobación a las acciones de los grupos ilegales; así mismo una actitud emotiva de los pobladores, sin medir el riesgo implícito al oponerse al actor armado.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> PEÑARANDA, Ricardo, "Resistencia civil y tradiciones de resistencia en el sur-occidente colombiano". Ponencia presentada en el Seminario Taller, War, Democracy and Globalization, organizado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia y el Crisis States Programme (CSP) del London School of Economics and Political Science. mayo 10 y 11 de 2004, Bogotá Colombia.

Estas manifestaciones de resistencia y la activación de mecanismos de defensa como la Guardia Indígena, fueron el resultado de la intensificación de la violencia por parte de los grupos guerrilleros, principalmente de las Farc y estructuras pertenecientes a las Auc. Mediante la Resolución de Jambaló de 1999 las comunidades indígenas hicieron público el traslado de la guerra a sus territorios y la manera abusiva como los protagonistas del conflicto pretenden involucrar a la población en la confrontación armada.

Entre las principales manifestaciones de resistencia no armada donde se ha privilegiado la movilización política cabe mencionar las siguientes: el 28 de mayo de 1999 en Piendamó, los participantes en una manifestación que demandaban atención por parte del Gobierno, expulsaron airadamente a una columna del frente 6 de las Farc que pretendía incorporarse al movimiento de protesta; el 17 de mayo de 2001, 30.000 manifestantes procedentes de las comunidades del norte del Cauca, llegaron a Cali en desarrollo de la llamada "Minga por la vida y contra la violencia", con el propósito de protestar contra las masacres realizadas por el bloque Farallones de las Auc en la zona del río Naya; el 12 de abril de 2003, mediante la presión ejercida por la comunidad guambiana contra las Farc, fueron liberados

en Silvia el alcalde de esta localidad y tres familiares, quienes habían sido secuestrados por la organización armada el día anterior; el 3 de julio de 2003 en el municipio de Caldoño, 400 indígenas integrantes del resguardo Pioyá lograron la liberación inmediata del ciudadano suizo Florian Arnold Benedite, director del organismo 'Manos por Colombia', y su colaborador Ramiro Pito, quienes habían sido plagiados cuando se movilizaban entre Caldoño y la zona indígena de Monterilla donde la entidad tiene una escuela; el 27 de abril de 2004 en territorio indígena del norte del Cauca fueron liberados por la comunidad y la Guardia Indígena cuatro delegados de Naciones Unidas que se encontraban secuestrados por las Farc y habían sido invitados por la organización indígena.





# DINÁMICA RECIENTE DEL CONFLICTO ARMADO

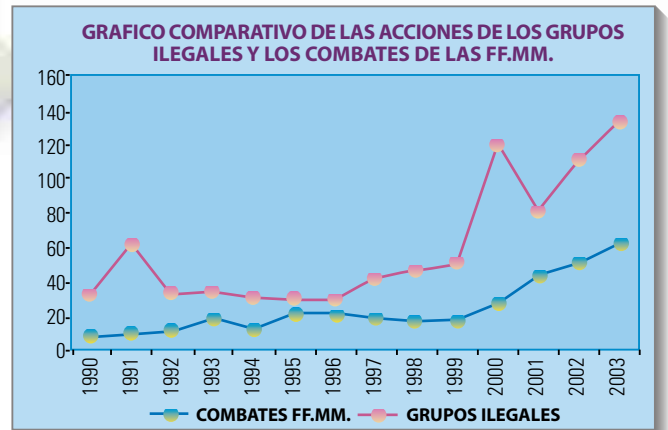
**Las Farc han mantenido un comportamiento ascendente en su accionar armado en los últimos tres años: pasaron de 45 acciones en 2001 a 78 en 2002 y 120 en 2003.**

La curva del conflicto armado<sup>7</sup> ha ido en aumento desde 1997, pero en los últimos cuatro años la marcada intensificación se ha producido como consecuencia de las acciones por iniciativa de las Farc y los combates y operaciones militares emprendidos por la Fuerza Pública, en particular contra esta guerrilla. Es importante destacar cómo mientras a nivel nacional las tendencias actuales muestran que las acciones de la guerrilla bajan mientras que las de la Fuerza Pública las superan ampliamente, en Cauca las acciones armadas siguen aumentando y superan los contactos armados. En los gráficos y mapas, se discriminan las acciones armadas que parten de la iniciativa de la guerrilla y los combates que la Fuerza Pública libra en contra de estas organizaciones.

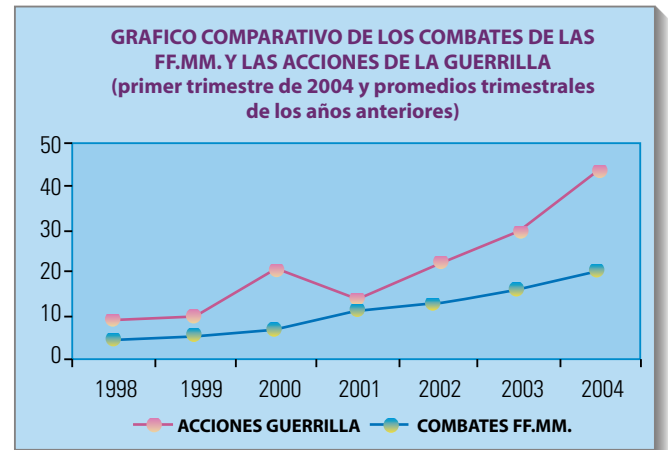
Las Farc han mantenido un comportamiento ascendente en su accionar armado en los últimos tres años: pasaron de 45 acciones en 2001 a 78 en 2002 y 120 en 2003. Esta tendencia se refuerza en el primer trimestre de 2004 como se puede observar en el gráfico, las 43 acciones registradas en este lapso superan ampliamente los promedios trimestrales de los años anteriores. Los hostigamientos y ataques contra las instalaciones de la Fuerza Pública, así como la realización de retenes ilegales son las acciones que más aportan. La Fuerza Pública que en 2000 libró 14 combates contra esta guerrilla, registró 29 en 2001, 40 en 2002 y 50 en 2003. En los tres primeros meses del presente año los combates propuestos por las FF.MM a las Farc fueron 17, con lo cual se evidencian los mayores esfuerzos aplicados para retomar la iniciativa armada contra esta guerrilla.

El incremento en la actuación de la Fuerza Pública se ha logrado a través de la disposición de siete batallones presentes

en el departamento. El Batallón José Hilario López con sede en Popayán, opera en veinte municipios; el Batallón Boyacá de Nariño cubre algunos municipios del sur y la Bota; los batallones Pichincha y Codazzi del Valle cubren los municipios del norte; la Brigada No. 9 de Neiva atiende los municipios del oriente; en el Macizo ha operado la Brigada Móvil No. 6; en diciembre de 2003 entra en acción un Batallón de Alta Montaña con sede en el corregimiento de Valencia, jurisdicción de San Sebastián, con el propósito de



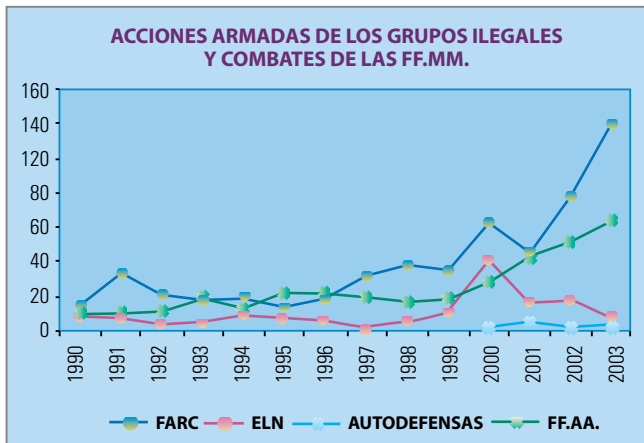
Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín Diario del DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.



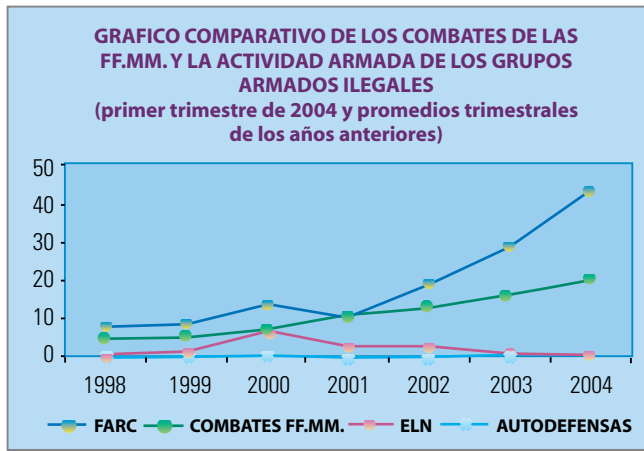
Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín Diario del DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

<sup>7</sup> La curva del conflicto incluye los contactos por iniciativa de la Fuerza Pública y las acciones por iniciativa de las guerrillas. Las acciones por iniciativa de las guerrillas se dividen en tres: i) las acciones orientadas contra la Fuerza Pública, es decir las emboscadas, los ataques a instalaciones militares, los hostigamientos y ataques a poblaciones; ii) destrucción de infraestructura y iii) los actos con objetivos económicos, es decir las acciones de piratería terrestre y los asaltos a entidades públicas y privadas. Se excluyen las confrontaciones entre guerrillas y autodefensas que se analizan más adelante.





Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín Diario del DAS.  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.



Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín Diario del DAS.  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

impedir el paso de la guerrilla entre el Huila y Nariño por uno de sus principales corredores estratégicos en el Macizo.

En el caso del Eln la reducción de su iniciativa armada es significativa. Pasó de registrar 40 acciones en 2000, a 16 en 2001, 17 en 2002 y 6 en 2003. Esta guerrilla que tradicionalmente había tenido protagonismo armado en el departamento realizando principalmente acciones de sabotaje, piraterías terrestres y retenes ilegales, en 2003 registra 2 hostigamientos, 2 retenes, una acción de sabotaje y una de piratería terrestre. En el primer trimestre de 2004, el frente Manuel Vásquez Castaño emboscó una patrulla del Ejército en el municipio de Santa Rosa. Por consiguiente, se podría decir que la actividad militar del Eln en la actualidad es marginal. La Fuerza Pública de su lado, incrementó los combates contra esta organización entre 2000 y 2001 con respecto a años anteriores, registrando 12 en el primer año y 11 en el segundo. Entre 2002 y 2003 el Ejército sigue presionando mediante 5 combates registrados en el primer año y 7 en el segundo. En 2004 se presentan en el primer trimestre

3 combates, uno de ellos en el corregimiento La Paloma de El Tambo, donde se puso al descubierto que la organización ante las dificultades en el campo militar ha tenido que comenzar a operar conjuntamente con las Farc; en esta acción fueron dados de baja 7 insurgentes.

Las autodefensas que habían limitado su acción a golpear civiles inermes a través de asesinatos selectivos y masacres, en 2000 comienzan a registrar algunos enfrentamientos directos con los frentes guerrilleros que operan en la región. Estos enfrentamientos tuvieron su punto más elevado en 2001, año en el que se produjeron 5, para descender a uno en 2002 y 3 en 2003. En los primeros meses de 2004 estas organizaciones no registran ninguna acción armada. La acción de la Fuerza Pública contra los grupos de autodefensa, que tradicionalmente había sido baja, comienza a hacerse mucho más visible en 2000 y más constante en los últimos tres años, durante los cuales se produjeron 7 combates.

Si se comparan estrictamente los ataques de las guerrillas contra la Fuerza Pública (emboscadas, hostigamientos y ataques a instalaciones) con los contactos armados que se producen por iniciativa de la Fuerza Pública, tal como se observa en los gráficos adjuntos, se descubre una tendencia ascendente, obviamente con variaciones, a partir de 1997; en 2000 y 2003 se producen los niveles superiores en los ataques de las guerrillas, que bajaron coyunturalmente en 2001 para repuntar en 2002, mientras que los contactos armados que vienen creciendo desde 2000 en forma exponencial llegaron a su máximo nivel en 2003. En el primer trimestre de 2004 la tendencia hacia la intensificación del conflicto se corrobora plenamente y de seguir así las acciones armadas de lado y lado el presente año superarán ampliamente los elevados niveles registrados en 2003.

Las acciones de sabotaje que fueron especialmente elevadas en 1991, coincidiendo con la respuesta de las Farc a la ofensiva militar contra el Secretariado en el municipio de Uribe, Meta, vuelven a registrar un repunte importante en el año 2000. En el primer trimestre de 2004 los sabotajes se convierten en la segunda acción más recurrente de la guerrilla después de los hostigamientos. De su lado, los asaltos con móviles económicos, las acciones de piratería y los retenes ilegales han tenido oscilaciones bruscas y desde 1998 vienen registrando un aumento notable.

El mapa 5 muestra la existencia de un patrón geográfico de continuidad en los combates que la Fuerza Pública dirigió entre 1998 y 2003 contra la guerrilla, produciéndose estas acciones con el propósito principal de contener el avance





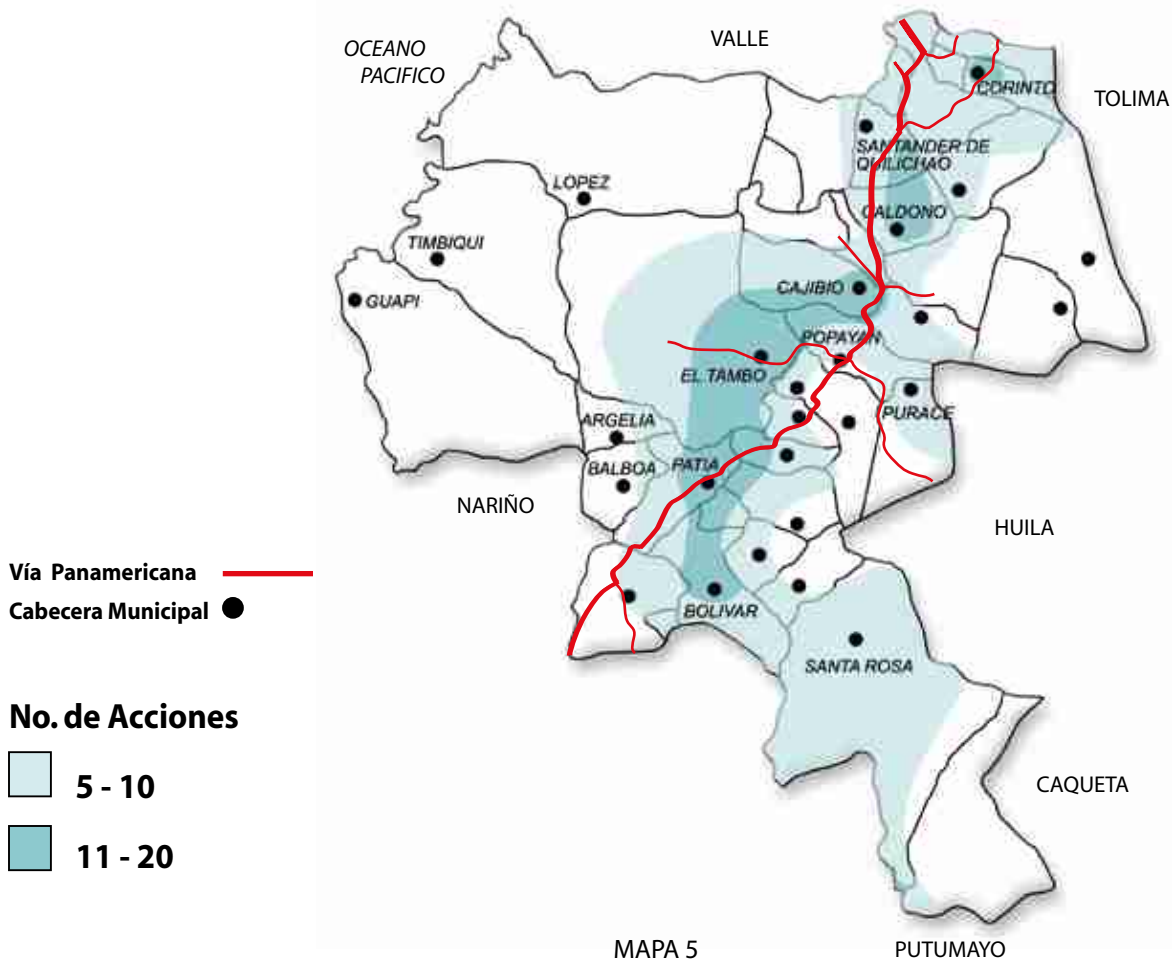
de las Farc hacia la costa Pacífica a través de los reiterados ataques contra los puestos de Policía localizados en sitios estratégicos que definen este corredor. Al profundizar aún más en la geografía de los combates de las FF.MM en la serie de mapas del 6 al 9, que distribuye las acciones dirigidas contra la guerrilla entre 2000 y 2003, se advierte una elevada concentración de estos hechos en municipios del norte, centro y sur del departamento. En el último cuatrienio la acción del Ejército fue particularmente elevada en 11 municipios donde se concentró el 60% de los 185

combates librados en el departamento: El Tambo, Cajibío y Puracé en el centro del departamento; Miranda, Santander de Quilichao, Caldono y Corinto en el norte; Patía y Bolívar en el sur; Santa Rosa en la Bota y la Sierra en el Macizo. Los combates que se registran en los primeros tres meses de 2004 mantienen la tendencia ascendente y el patrón geográfico de concentración observado, expresándose con mayor frecuencia en El Tambo (3), Puracé (3) y Popayán (2) en el centro del departamento; Toribío (4), Corinto (2), Buenos Aires (1) y Miranda

(1) en el norte; Patía (2) y Balboa (1) en el sur; y Piamonte (1) en la Bota.

De otro lado el mapa 10, muestra la existencia de continuidad geográfica de las acciones armadas realizadas por la guerrilla entre 1998 y 2003, que estuvieron dirigidas principalmente contra la Fuerza Pública. Este mapa refleja con claridad el propósito de las Farc de dirigir sus acciones hacia sitios específicos de la geografía que sumados constituyen un corredor que atraviesa el departamento de norte a sur. Los municipios donde la

## PATRÓN GEOGRÁFICO DE LOS COMBATES DE LAS FF.MM. CONTRA LOS GRUPOS ILEGALES 1998-2003

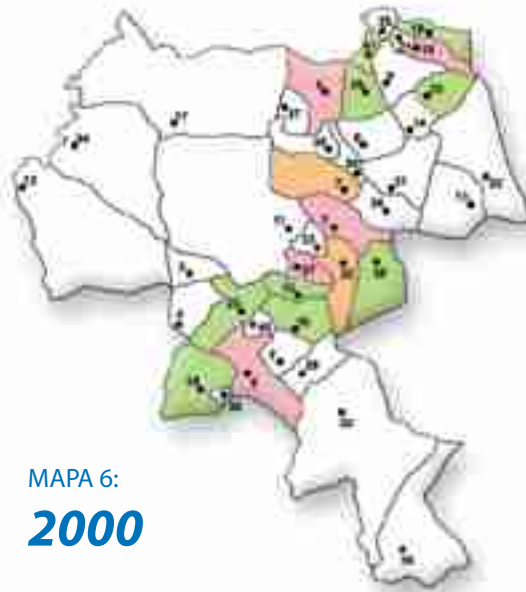


Fuente: Base de Datos de la Presidencia de la República y Boletín de DAS  
Procesado y georreferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial  
de Derechos Humanos y DIH,

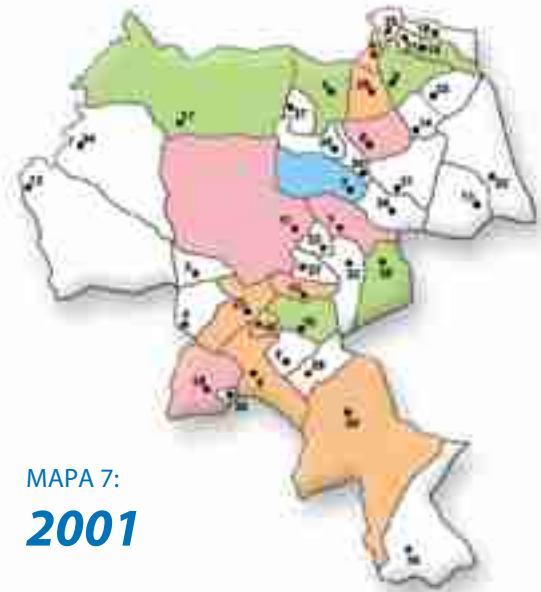




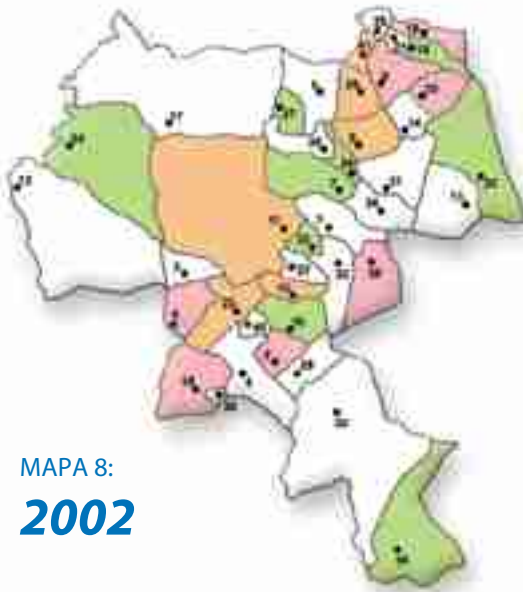
## EVOLUCIÓN DE LOS COMBATES DE LAS FF.MM. CONTRA LOS GRUPOS ILEGALES 2000 - 2003



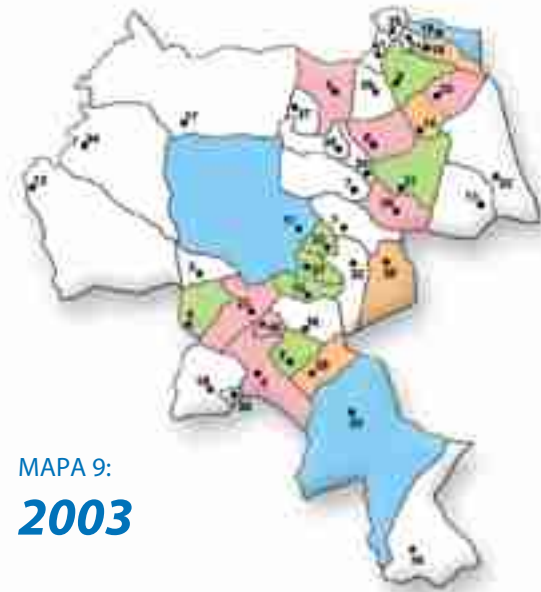
MAPA 6:  
**2000**



MAPA 7:  
**2001**



MAPA 8:  
**2002**



MAPA 9:  
**2003**

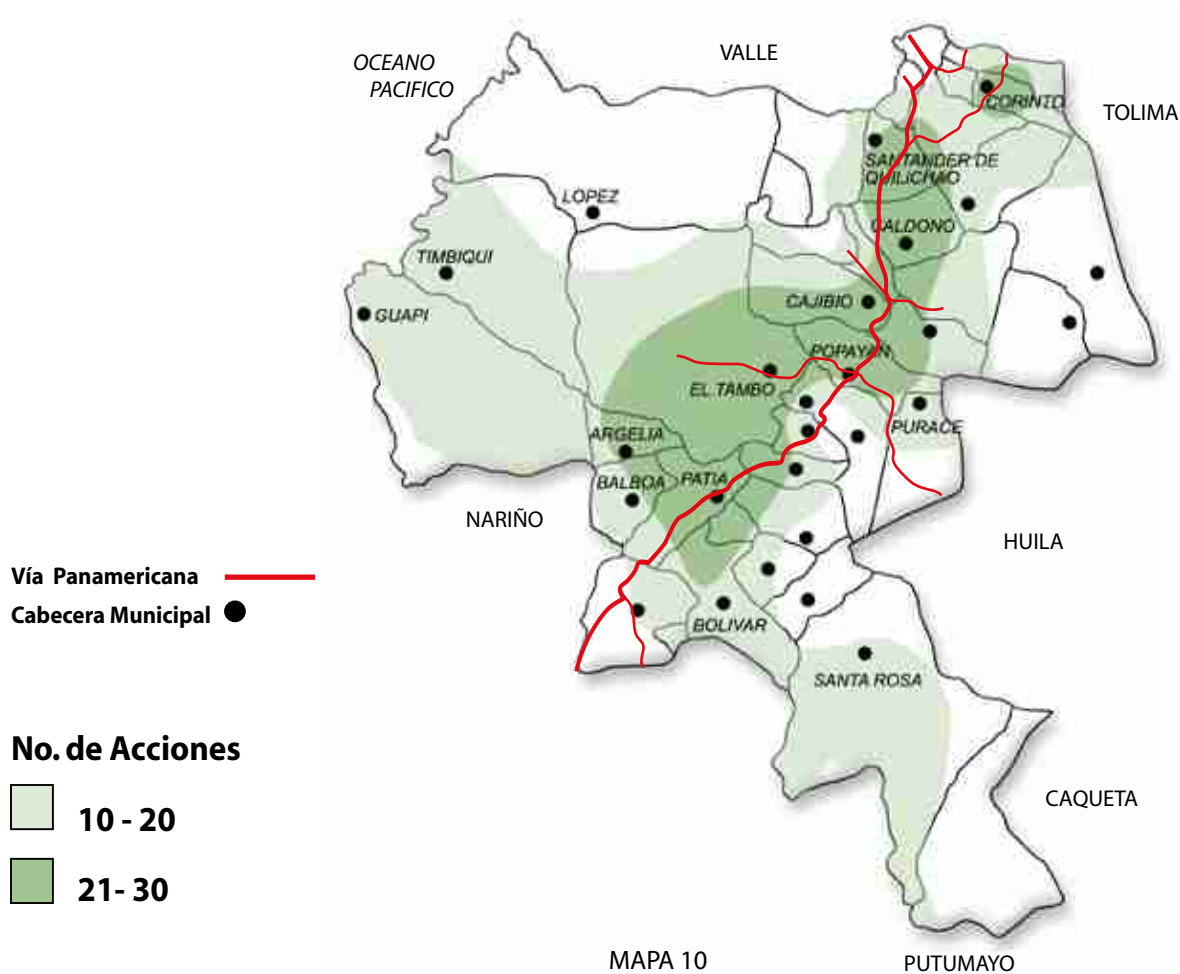
<p>Baja intensidad de acción (1 acción) <span style="color: green;">■</span></p> <p>Intensidad media baja de acción (entre 2 y 3 acciones) <span style="color: pink;">■</span></p>	<p>Intensidad media alta de acción (entre 4 y 5 acciones) <span style="color: orange;">■</span></p> <p>Alta intensidad de acción (entre 6 y 8 acciones) <span style="color: blue;">■</span></p>
--	---

Fuente: Base de Datos de la Presidencia de la República y Boletín Diario del DAS.  
Procesado y georreferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH,  
Cartografía IGAC-DANE.





# PATRÓN GEOGRÁFICO DEL ACCIONAR DE LAS GUERRILLAS 1998-2003



Fuente: Base de Datos de la Presidencia de la República y Boletín de DAS  
Procesado y georreferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH,  
Cartografía IGAC-DANE.

actividad guerrillera se aglutina son paso obligado en el establecimiento de comunicación desde el suroriente colombiano (pasando por municipios del norte del Huila y sur del Tolima) con la costa Pacífica en el extremo suroccidental del país. Especial importancia reviste la zona del Macizo dentro del patrón de continuidad de la actividad armada que parte del sur del Tolima y va hasta el centro del Cauca, desde donde se bifurca en dos ramas; una hacia el occidente, que incluye municipios del nororiente de Nariño y noroeste de Putumayo, y la otra, que

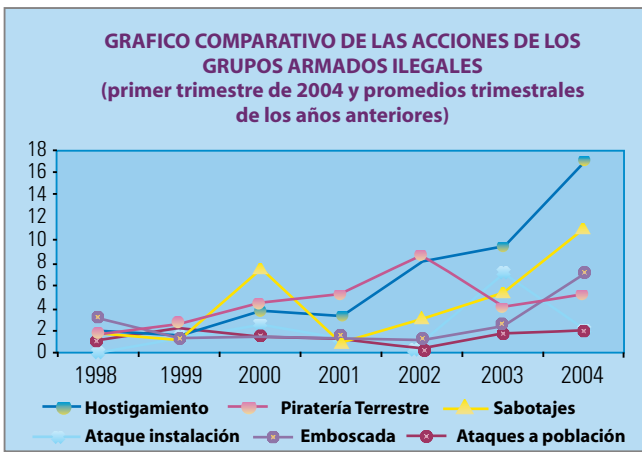
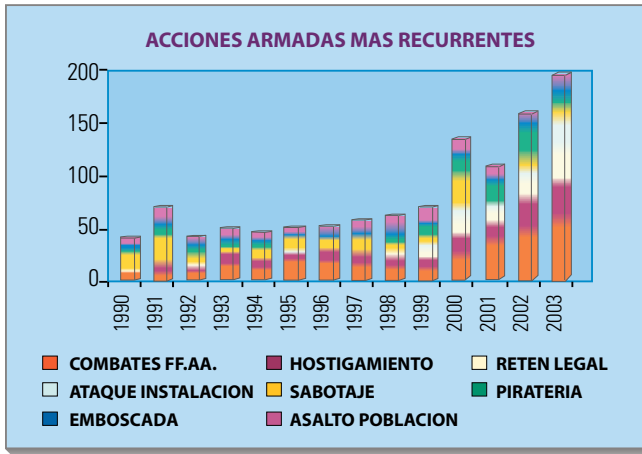
va por el oriente recorriendo los municipios del Huila que limitan con el Cauca hasta alcanzar la parte más occidental del departamento de Caquetá.

Se destacaron en particular, entre 1997 y 2001, la ocurrencia de una cadena de tomas a poblaciones por parte de las guerrillas, principalmente por las Farc, que en no pocas ocasiones apuntaron a la destrucción de puestos de Policía con lo cual lograron debilitar la presencia del Estado en las zonas atacadas. La prevalencia que en este intervalo las Farc dieron

a la destrucción de las instalaciones de Policía, configuró todo un propósito estratégico. En efecto, este comportamiento estuvo inscrito dentro del desarrollo de planes de guerra dispuestos a lograr el control de zonas específicas cada vez más amplias con el propósito de construir núcleos de expansión de control militar y político, con lo cual el grupo guerrillero pretendía cautivar políticamente lo que consideraba había ganado militarmente.

Los principales ataques a poblaciones en el período 1997-2000 se dirigieron contra





Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín Diario del DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

Silvia, Timbío, Caldone, Caloto, Rosas, Piendamó y Páez; en 2001 los ataques no fueron pocos y algunos tuvieron especial impacto. En febrero de 2001 fue atacado El Tambo; en julio de 2001 en Bolívar, cerca de 500 subversivos de los frentes 60 y 13 de las Farc, este último proveniente del Caquetá, atacaron la estación de Policía y liberaron a 79 reclusos; en septiembre del mismo año 2001, en Almaguer, se presentó una incursión por parte de subversivos de las Farc, en la cual 24 agentes de la Policía murieron. Hubo también ataques en este año en Corinto, El Tambo, Patía, Bolívar, Inzá y Puracé. En 2002 se produce un solo ataque, en el mes de enero cuando guerrilleros de las Farc atacaron la estación de Policía de Puracé, causando bajas y daños materiales.

De otro lado, fueron varios los intentos de tomas a poblaciones del norte del Cauca que se frustraron gracias a la resistencia opuesta por la comunidad y la intervención de la Guardia Indígena, de los cuales destacamos los siguientes: en noviembre de 2001 la población de Caldone mediante una movilización bloqueó el avance de una

columna del frente 6 de las Farc que pretendía tomarse el pueblo; en diciembre de 2001, la comunidad de Puracé hace sentir su rechazo contra una columna del Eln que incursionó en la población; el 31 de diciembre de 2001 los habitantes de Puracé evitan que las Farc se tomaran la población y en desarrollo de la protesta se produce un enfrentamiento entre la población desarmada e integrantes del frente 6; el 27 de febrero de 2002, pobladores de Silvia impidieron que guerrilleros de la Farc se tomaran por asalto la población; el 2 de marzo de 2002 la población de Inzá frustró la toma que guerrilleros de las Farc pretendían llevar a cabo.

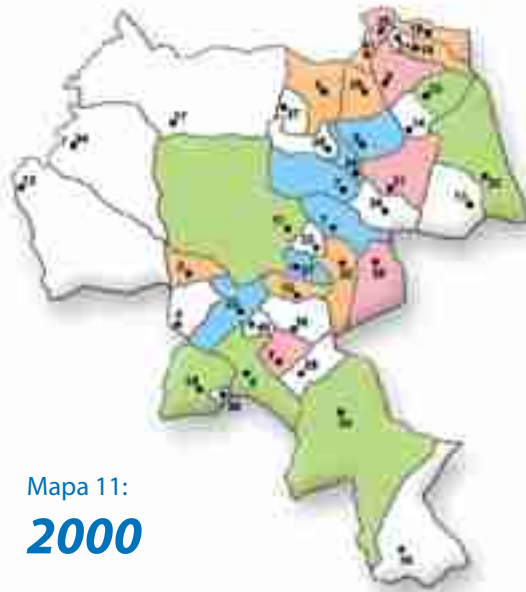
En 2003 y el primer trimestre de 2004 las Farc intensifican los ataques contra las poblaciones particularmente en municipios del norte. En 2003, Silvia fue atacada en mayo y julio por el frente 6 que tuvo como propósito destruir el puesto de Policía; en agosto el frente 8 atacó El Tambo con la intención de afectar a la Policía; en octubre los ataques se produjeron en el norte a través del frente 6 que pretendió golpear a la Policía en Miranda y Jambaló. En 2004 las acciones contra las poblaciones se trasladan hacia el sur y la Bota Caucana y son llevadas a cabo por el frente 8 que en febrero atacó Bolívar y en marzo Santa Rosa.

Al profundizar en la geografía del accionar armado de la guerrilla entre 2000 y 2003, se observa en la serie de mapas del 11 al 14 el énfasis de los ataques en municipios que conforman el corredor estratégico que conduce a las Farc al Pacífico. El mayor número de acciones se dirigió principalmente a atacar a la Fuerza Pública mediante el recurso a los hostigamientos, los ataques contra instalaciones principalmente de la Policía y las emboscadas a patrullas del Ejército. En este lapso la guerrilla realizó 415 acciones, de las cuales 60% se concentró en tan sólo 10 municipios: El Tambo, Popayán, Puracé, Cajibío y Piendamó en el centro del departamento; Caldone y Santander de Quilichao en el norte; Patía y Sucre en el sur; y Rosas en la Bota. En 2003, Silvia en el centro, Toribío en el norte y Balboa en el sur fueron blanco insistente de las Farc. En los primeros tres meses de 2004 el accionar de las Farc es persistente en los municipios mencionados, confirmando el interés de este grupo armado en debilitar la presencia estatal en los sitios que le permiten la movilidad y el acceso a zonas que le garanticen su supervivencia. En este período las Farc dirigieron sus ataques particularmente sobre Caldone, Toribío, Jambaló, Piendamó, Silvia y Santander de Quilichao, que conforman un grupo de municipios vecinos ubicados entre el norte y centro del departamento.

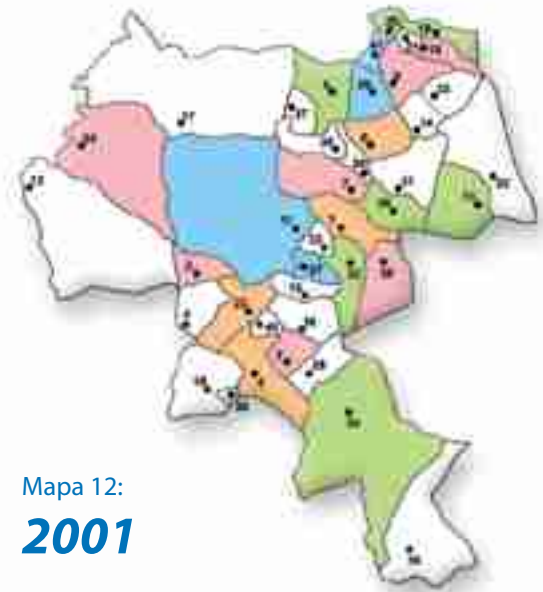




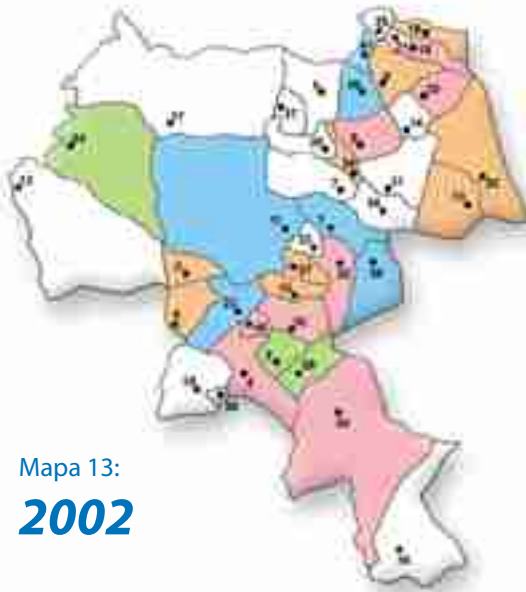
## EVOLUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA GUERRILLA 2000 - 2003



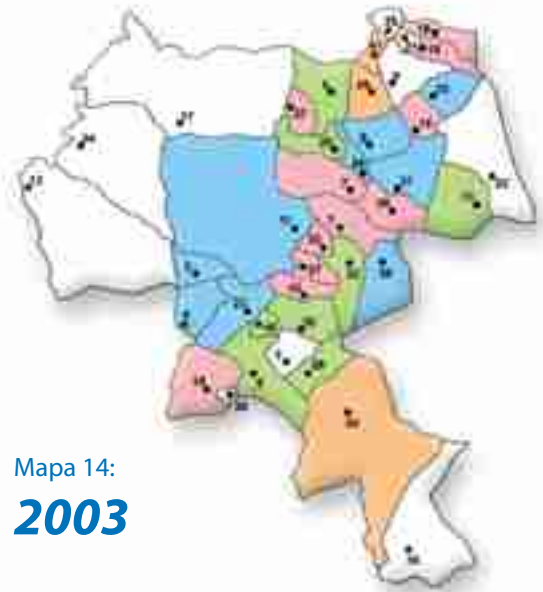
Mapa 11:  
**2000**



Mapa 12:  
**2001**



Mapa 13:  
**2002**



Mapa 14:  
**2003**

Baja intensidad de acción (1 acción)  Intensidad media alta de acción (entre 4 y 5 acciones)   
Intensidad media baja de acción (entre 2 y 3 acciones)  Alta intensidad de acción (entre 6 y 17 acciones) 

Fuente: Base de Datos de la Presidencia de la República y Boletín Diario del DAS.  
Procesado y georreferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH,  
Cartografía IGAC-DANE.







# CONSECUENCIAS HUMANITARIAS DEL CONFLICTO ARMADO

**La cifra de los asesinatos de civiles que tienen origen en estos actores armados, venía en aumento desde 1997 y alcanzó en 2001 su nivel más elevado.**

El impacto humanitario del conflicto armado en el departamento del Cauca tiene su momento más crítico en la ofensiva de los grupos de autodefensa a partir del año 2000 y con mayor intensidad en 2001, con el aumento de los asesinatos selectivos, las masacres y los homicidios. Así mismo, la evidencia que se presenta en esta sección muestra cómo la actuación de los protagonistas del conflicto armado explica la elevada incidencia de las violaciones a los DD.HH. y al DIH.

La cifra de los asesinatos de civiles que tienen origen en estos actores armados, venía en aumento desde 1997 y alcanzó en 2001 su nivel más elevado. Pese a que en la mayoría de los casos no se establece la identidad del responsable, la dinámica de crecimiento de las muertes cometidas por los grupos de autodefensa corresponde con los momentos y lugares en los cuales con mayor intensidad ocurren los asesinatos selectivos y las masacres. Tal y como lo muestra la serie de mapas del 15 al 18, entre 2000 y 2003 los asesinatos de civiles se concentraron principalmente en Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Popayán, El Tambo, Timbío, Rosas, Patía y Mercaderes, municipios localizados en el norte, centro y sur del departamento que tienen como eje central el trazado de la carretera Panamericana y corresponden con los desplazamientos de los actores que los cometieron.

La actuación de los grupos armados ilegales en el escenario regional también determina los énfasis en el tiempo y la sectorización de los homicidios. Es así como particularmente en 2001 superaron la tasa de 100 por cada cien mil habitantes, muy por encima del promedio nacional, los municipios de Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Corinto, El Tambo, Timbío, Rosas, Patía, Mercaderes y Piamonte. Desde la perspectiva que presenta la serie de mapas del 19 al 22, se muestra cómo los homicidios han sido persistentes entre 2000 y 2003 en un conjunto de municipios ubicados entre las cordilleras Occidental y Central,

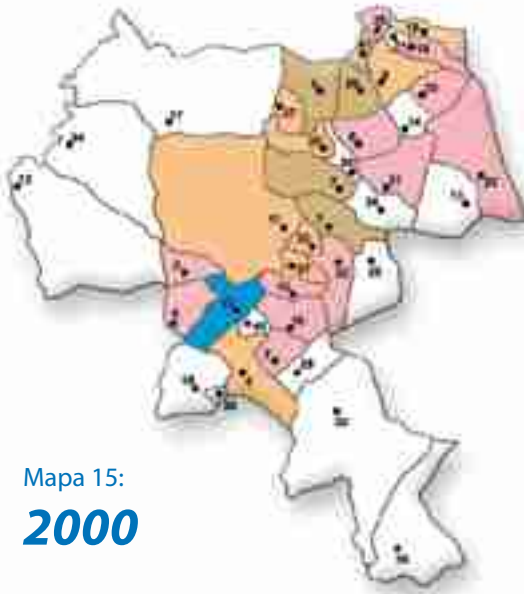
franja integrada alrededor de la carretera Panamericana donde la intensidad de la violencia se explica principalmente por la presión de las autodefensas, pero también de las guerrillas.

En la zona norte del departamento, caso particular es el de los municipios de Buenos Aires (localidades de Patiobonito y Timba), La Vega, Silvia y la localidad de La Paz, así como en Jamundí, Valle del Cauca, en abril de 2001, donde tuvo lugar una masacre en el Alto del Naya, cuando fueron asesinadas alrededor de 40 personas entre campesinos, indígenas y afrocolombianos, por el bloque Farallones de

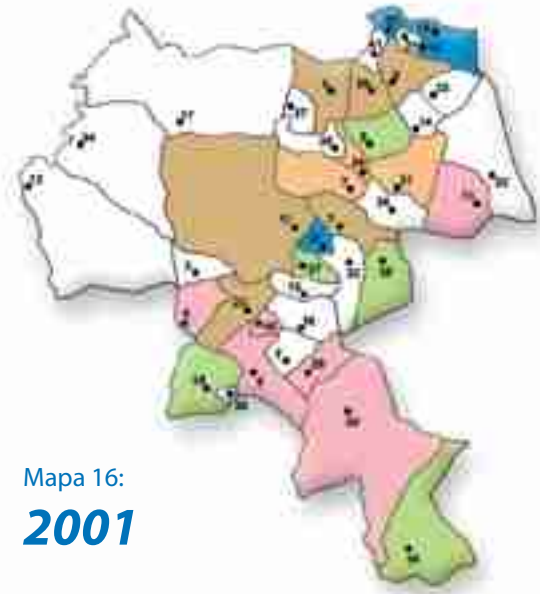




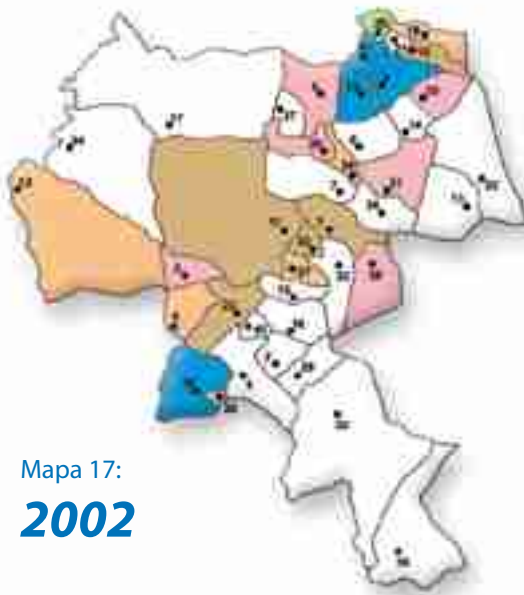
## MUNICIPIOS DONDE SE COMETIERON ASESINATOS POR GRUPOS ARMADOS ILEGALES 2000 - 2003



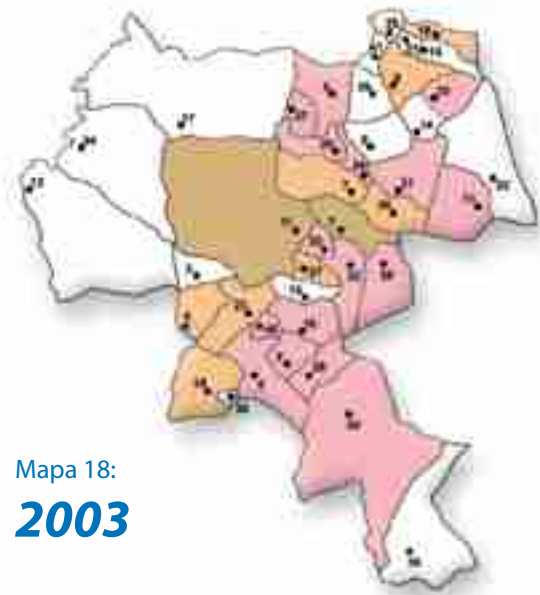
Mapa 15:  
**2000**



Mapa 16:  
**2001**



Mapa 17:  
**2002**



Mapa 18:  
**2003**

Baja intensidad ( entre 1 y 3 víctimas ) ■  
Intensidad media ( entre 4 y 6 víctimas ) ■

Intensidad media alta ( entre 7 y 9 víctimas ) ■  
Alta intensidad ( entre 10 y 19 víctimas ) ■  
Muy elevada intensidad ( entre 20 y 70 víctimas ) ■

Fuente: Base de Datos de la Presidencia de la República y Boletín Diario del DAS.  
Procesado y georreferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH,  
Cartografía IGAC-DANE.





las Auc. Este hecho, que determinó desplazamientos de población, se enmarca en el propósito de las autodefensas de aislar la fuerza militar del Eln en los Farallones de Cali. Muy cerca de este municipio, el 19 de enero de 2002, alrededor de 200 integrantes de las autodefensas incursionaron en los municipios de Miranda, Corinto y Florida (Valle), y realizaron el asesinato en cadena de alrededor de 15 pobladores, situación que muestra la persistencia de la violencia en el norte del departamento. También en Corinto, en las veredas Río Negro, Media Naranja y Quebraditas, 12 personas murieron en una incursión de miembros de las Auc en noviembre de 2001 y posteriormente el 26 de marzo de 2002, fueron asesinados 4 comuneros indígenas Páez en un resguardo, según lo denunció el Consejo Regional Indígena. En Miranda, igualmente se presentaron 2 masacres en marzo y mayo de 2001. En la primera en la vereda Caraqueño, Wilson Ramírez Santacruz (concejal de ese municipio) y 3 campesinos fueron asesinados por un grupo de hombres armados sin identificar; en la segunda, en el corregimiento Ortegal, hombres armados, con lista en mano, asesinaron a otras 3 personas.

En el municipio de Caloto, en donde ocurrió la masacre del Nilo en 1991, se registraron en 2001 y 2002 tasas de homicidios superiores a la nacional y no menos de 3 masacres en 2001. El 23 de febrero en el sitio El Palo, al menos 6 campesinos fueron asesinados por miembros de las Auc; el 6 de mayo en los caseríos de Guacharné y Cabañitas, 8 labriegos fueron asesinados por 6 hombres armados con pistolas nueve milímetros y subametralladoras; finalmente, días después, el 23 de mayo, en la vereda El Pedregal ubicada en la vía que conduce a Santander de Quilichao, 2 hombres armados asesinaron a 3 comerciantes.

En el centro del departamento, Timbío, ubicado en el margen izquierdo de la cordillera Central, tradicionalmente ha sido afectado por la presencia de las Farc y más recientemente las autodefensas han incursionado con especial intensidad. El municipio tuvo una tasa de 138 en 2001 y de 211 en 2002, lo cual equivale al mayor índice registrado entre los municipios del departamento como efecto del accionar de las autodefensas. El 14 de enero de 2002 en aguas del río Tupasinca, fue hallado el cadáver de Enoc Samboní, presidente del Concejo del municipio de Santa Rosa y líder social de la región; días después, el 7 de febrero, 4 personas más fueron asesinadas por desconocidos en el estadero “Las Tres Lunas”, establecimiento situado en la vía que comunica a Popayán con el municipio; el 6 de marzo, en la vereda Hato Viejo, miembros de las Auc asesinaron a 3 campesinos y el 25 de marzo, miembros del frente 6 de las Farc

asesinaron al Teniente Alfonso Rodríguez, Comandante de la Policía de esa población.

Popayán también ha sido escenario de la realización de homicidios múltiples. El 15 de enero de 2001, en el sitio conocido como La Rejoja en zona rural, un grupo armado, sin identificar, asesinó a 10 campesinos que viajaban en un bus tipo escalera. El 9 de abril de 2001, en el casco urbano, hombres armados sin identificar asesinaron a 3 miembros de una misma familia y el 23 de enero de 2002, en el barrio Nazaret, en el suroccidente de la ciudad, un grupo de hombres pertenecientes a las Auc asesinaron a 4 jóvenes; antes de huir los asesinos dejaron letreros donde indicaban que se trataba de una “limpieza social”.

El Tambo, entre las cordilleras Oriental y Central, si bien tradicionalmente no había tenido tasas tan elevadas, en 2001 con 148 tuvo el segundo índice más alto, en lo fundamental debido a masacres llevadas a cabo por las autodefensas y en menor medida por las guerrillas. El 15 de marzo de 2001, 6 personas fueron asesinadas por subversivos, tras ser sindicados de ser informantes de las Auc; un mes después, en el corregimiento La Yunga, fueron asesinadas 4 personas por un grupo de hombres desconocidos; el 21 de mayo en la vereda Bellavista, corregimiento La Uribe, fueron hallados los cadáveres de 3 campesinos; el 4 de agosto 4 campesinos más fueron asesinados por miembros de las Auc en el corregimiento de Piangua; finalmente, a principios de octubre, en un sector céntrico residencial del casco urbano, 5 personas fueron asesinadas a tiros por miembros de las Auc. En 2003 el municipio continúa registrando una tasa superior a la del país.

En Rosas las tasas de homicidio entre 2000 y 2002 fueron de 112, 142 y 94 respectivamente sin duda muy elevadas. Es éste un municipio con presencia indígena especialmente afectado por el accionar de las Farc y caracterizado por la presencia de cultivos de amapola. El 28 de marzo de 2001, en zona rural del municipio, fueron asesinados 5 campesinos líderes del Comité de Integración del Macizo Colombiano por un grupo de hombres armados sin identificar. Por último, no hay que olvidar que en Puracé, el 9 de febrero de 2001, en el parque nacional que lleva el mismo nombre, en límites de Cauca y Huila, fueron asesinadas por las Farc 9 personas de las cuales siete pertenecían a un grupo ecologista de Bogotá.

En la zona sur, Patía que registró una tasa de 195 en 2001 y de 201 en 2002, es a nivel del departamento el municipio más



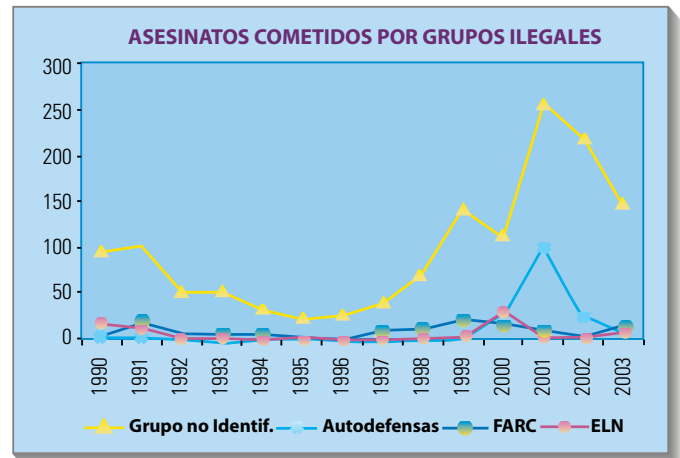




crítico si se considera la tasa promedio anual entre 2000 y 2003. El municipio se ha caracterizado por tener cultivos de amapola y la presencia tanto de las autodefensas como de las Farc y el Eln. Si bien no han ocurrido masacres recientemente, está ubicado en la franja entre las cordilleras Central y Occidental en la que las autodefensas han actuado con especial intensidad en los dos últimos años, golpeando civiles inermes. De otro lado, Mercaderes, con 146 por cada cien mil habitantes en 2001 y 140 en 2002, es uno de los municipios que tradicionalmente ha re-gistrado tasas muy elevadas y en 2003 sigue estando por encima del promedio del país. Entre 1990 y 1995 los altos índices pueden ser explicados por la economía de la amapola. Más recientemente, la presencia de autodefensas y las Farc ayuda a explicar lo ocurrido.

Por último, Piamonte en la Bota Caucana con una tasa de homicidio de 144 dobló el promedio del país en 2001. Este índice tan elevado está asociado a asesinatos selectivos y a la ocurrencia de 2 masacres en octubre y diciembre de ese año. La primera ocurrió en una zona rural del municipio en donde miembros de las Auc asesinaron a 7 campesinos; la segunda fue realizada por las Farc en el resguardo Guayuyaco donde murieron 3 indígenas que participaban en una fiesta comunal.

No parece ser resultado de la casualidad que la situación del norte del Cauca se haya tornado tan crítica golpeando particularmente a las comunidades indígenas a partir de marzo de 2002, momento en el que paralelamente al incremento de la intimidación la resistencia contra la guerrilla comienza a perder fuerza: el 5 de marzo en Santander de Quilichao, desconocidos asesinaron al ex gobernador del resguardo de Las Delicias, Samuel Fernández Dizú; el 13 de marzo en La Vega, el gobernador del resguardo El Paraíso, Jesús Mamián, de 37 años, corrió la misma suerte; el 6 de septiembre en el municipio de Caloto, un dirigente indígena y su hija de 8 meses fueron ultimados por 2 hombres encapuchados que irrumpieron en su vivienda; el 23 de octubre en un establecimiento público del resguardo San Francisco, en Toribío, el líder Páez Lionso Fernández fue secuestrado por un grupo de hombres armados sin identificar. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (ACIN) ha denunciado para el período 2000-2003 el asesinato de 51 de sus miembros, la amenaza de 28, la desaparición forzada 18 más y la realización de 5 atentados. Se destaca el asesinato atribuido a las Farc del líder indígena Cristobal Secue, ex-presidente del CRIC y de la ACIN y abanderado de la aplicación de los mecanismos de justicia indígena.



Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín Diario del DAS.  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

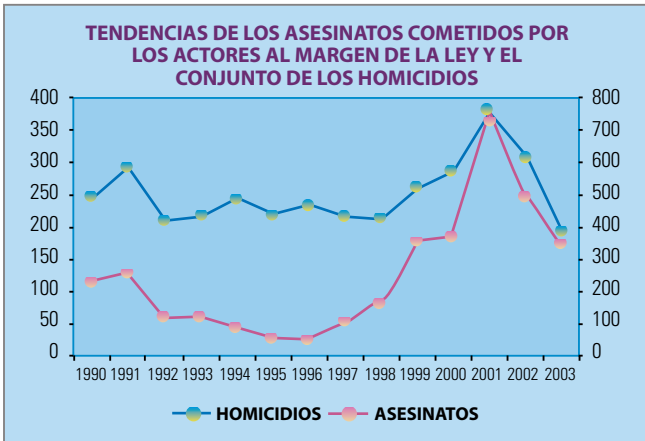


Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín Diario del DAS.  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

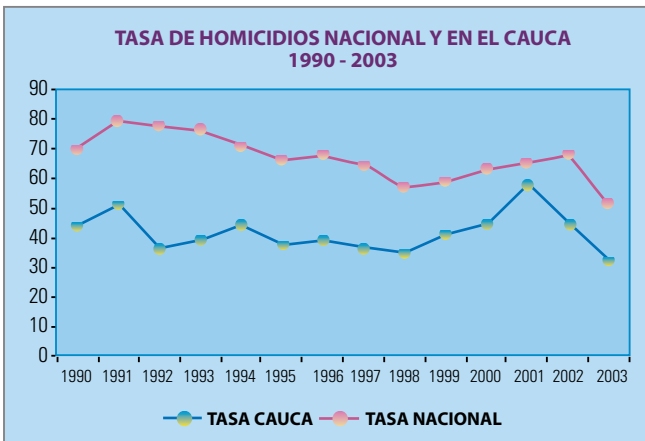
Así mismo, los grupos armados irregulares han identificado como uno de sus principales objetivos afectar la gobernabilidad democrática por medio de amenazas a los mandatarios locales, concejales y funcionarios públicos. Luego del rompimiento del proceso de paz en febrero de 2002, las Farc inició una campaña encaminada a debilitar al Estado a nivel local a partir de amenazas a burgomaestres, personeros, jueces, fiscales y otros funcionarios. En algunos casos las amenazas se hicieron efectivas: en junio de 2000 el alcalde de Cajibío fue asesinado, al igual que los burgomaestres de Almaguer y Bolívar en septiembre y octubre de 2003. Los concejales también han sido víctimas de homicidios, en el período 2000-2003, 4 de ellos fueron asesinados, 1 por las autodefensas y 3 por las Farc.

De otro lado, el secuestro en el Cauca con variaciones, ha tendido al alza entre 1992 y 2003, siendo los años pico 2000 y 2003. Los secuestros registrados en los primeros 4 meses de 2004 corresponden al promedio del año anterior, lo cual demuestra que mientras este delito tiende

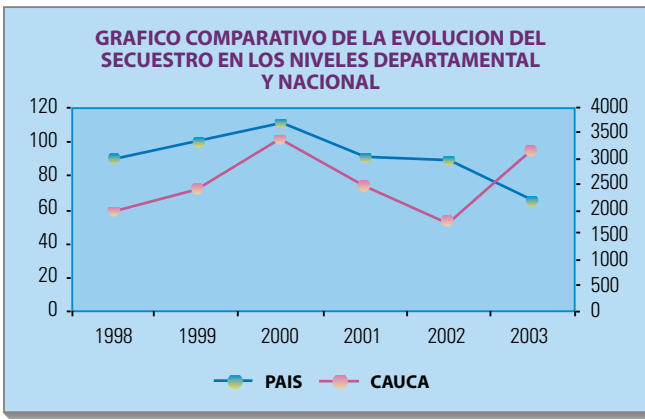




Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín Diario del DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.



Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín Diario del DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.



Fuente: Fondelibertad. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

a disminuir en el país en el Cauca es resistente a la baja. En los últimos 6 años entre los grupos identificados como autores las Farc fueron responsables del 40%, el Eln del 16%, otras guerrillas

del 3% y las autodefensas del 5%; el 46% restante está atribuido a desconocidos y en esta categoría además de los casos sin establecer está incluida la delincuencia común. Al contrastar la tendencia nacional con la departamental, salta a la vista la similitud de 1998 a 2000, período en el cual las dos curvas, como se puede observar en la gráfica, son ascendentes. De igual manera entre 2000 a 2002 se observa una baja. En 2003 las tendencias de las dos curvas comienzan a ser divergentes. Mientras que el conjunto nacional desciende de 2.986 víctimas a 2.200, lo que representa una baja del 25%, en el Cauca el secuestro sube de 52 a 94 víctimas, lo que representa un aumento del 73%. Este ascenso se explica principalmente por el mayor número de secuestros perpetrados por las Farc, organización que pasó de 24 víctimas en 2002 a 58 en 2003, lo que representa un aumento del 129%.

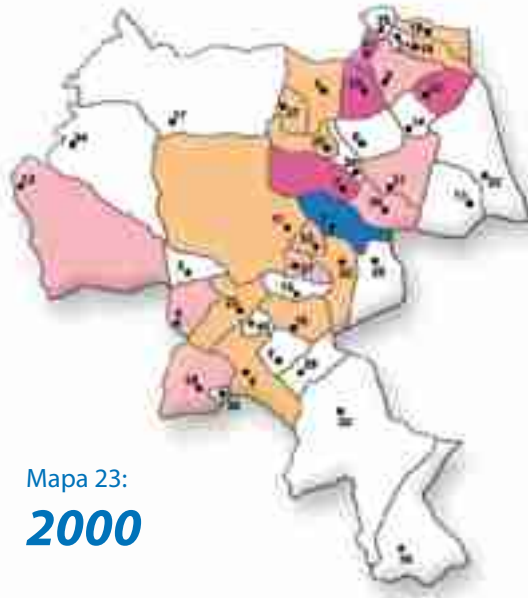
Entre 1998 y 2003, tan sólo 4 municipios concentraron el 50% de los secuestros a nivel departamental: Popayán con 86 víctimas (18.3%), Santander de Quilichao con 67 (14.6%), Cajibío con 34 (7.8%) y Patía con 32 (9%). Es de notar que estas poblaciones tienen como eje la carretera Panamericana, donde se producen buena parte de los plagios. Esta avenida principal que atraviesa el departamento permite a las organizaciones irregulares realizar retenes ilegales, en los cuales secuestran a personas, las cuales luego son llevadas a zonas montañosas de retaguardia.

En cuanto al desplazamiento forzado, entre 1996 y 2003, alrededor de 36.260 personas se desplazaron de sus municipios, corregimientos y veredas, mientras que 29.609 han llegado como desplazados. De igual manera alrededor de 7.333 hogares han sido expulsados, mientras que 6.035 han sido recibidos. Como se puede observar en el gráfico, los años más críticos en lo que a desplazamiento forzado se refiere fueron 2001 y 2002, con 13.114 y 15.421 víctimas respectivamente. Esta situación es resultado principalmente de la ofensiva de los grupos de autodefensas, la cual provoca la huida masiva de personas, tras sucesos como los ocurridos en el Alto Naya en el municipio de Buenos Aires, donde miembros de estas organizaciones cometieron la masacre ya referida. Así mismo, los desplazamientos forzados de mayores proporciones fueron producidos por combates entre los grupos irregulares y la Fuerza Pública, en medio de la confrontación. En efecto, hacia mediados de 2004 la elevada intensidad de los combates librados entre la Fuerza Pública y las Farc en el norte del departamento, ponen a los indígenas del Alto Naya al borde

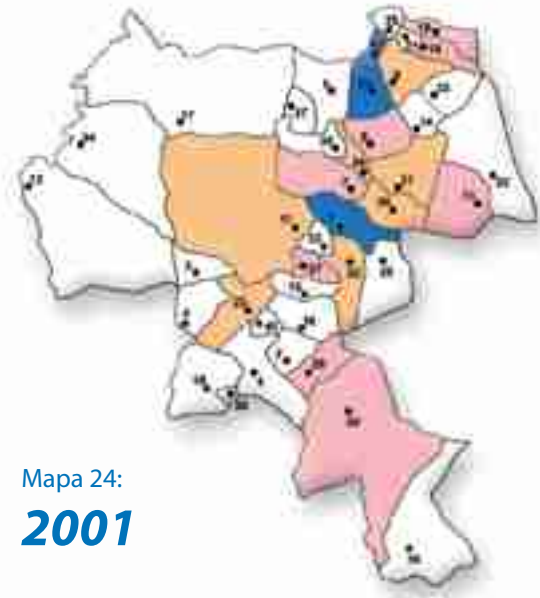




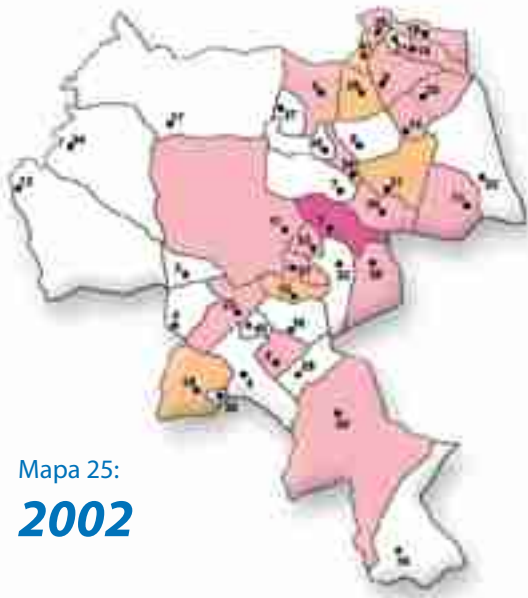
## MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL SECUESTRO 2000 - 2003



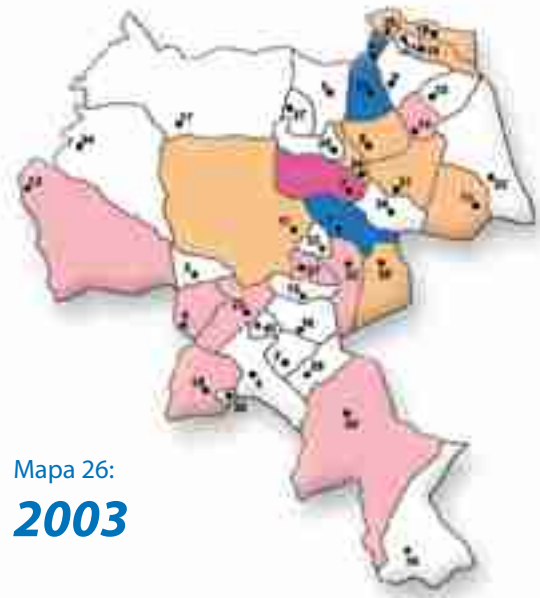
Mapa 23:  
**2000**



Mapa 24:  
**2001**



Mapa 25:  
**2002**



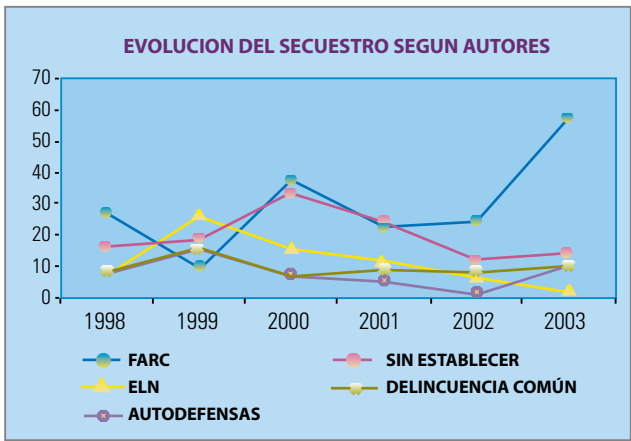
Mapa 26:  
**2003**

Baja intensidad (entre 1 y 2 víctimas) ■  
Intensidad media (entre 3 y 6 víctimas) ■

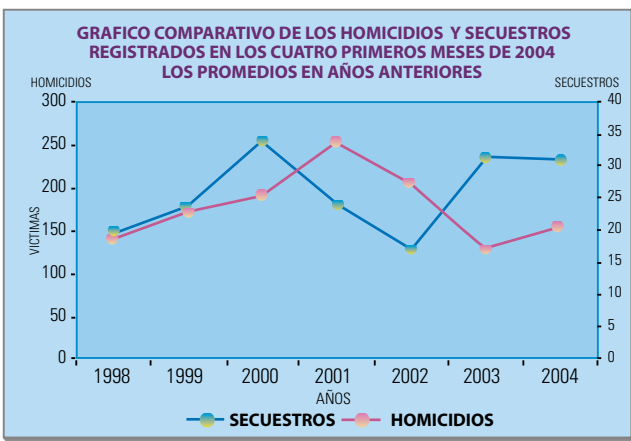
Intensidad media alta (entre 7 y 12 víctimas) ■  
Alta intensidad (entre 13 y 24 víctimas) ■

Fuente: Base de Datos de la Presidencia de la República y Boletín Diario del DAS.  
Procesado y georreferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH,  
Cartografía IGAC-DANE.

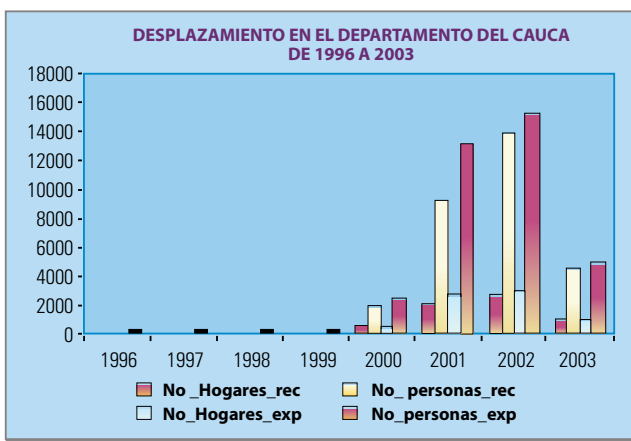




Fuente: Fondo de Libertad. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.



Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín Diario del DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.



Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín Diario del DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

Por último, el Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial de DDHH y DIH, reporta en el periodo 1990-2003, 128 eventos de los cuales 67 fueron accidentes y 61 incidentes. Del total de los accidentes que reporta el departamento, 84% corresponde a los casos ocasionados por minas antipersonal (MAP) y el porcentaje restante, a los ocasionados por municiones abandonadas sin explotar (MASE). Con respecto a los incidentes, 49% corresponde a casos de incautación, 41% a desminado militar y el 10% restante a sospecha de campo minado. Al analizar el registro de eventos desde 1990, se hace evidente un aumento progresivo del número de registros desde el 2001, ubicándose el 2003 como el más alto registro durante el periodo considerado, 29 accidentes y 26 incidentes. Este ascenso se explica sobre todo por la mayor utilización de estas armas prohibidas por parte de las organizaciones armadas irregulares, las cuales en medio de la confrontación siembran minas que tiene el objetivo de cerrar el acceso del adversario a las zonas de refugio y de importante valor estratégico.

Con respecto a las víctimas de accidentes en el departamento, durante el periodo considerado se presentaron 117 heridos y 34 muertos, siendo el 2003 el más alto registro, mientras que en 2002 se presentó una disminución importante en relación con el año anterior. Con respecto a la condición de las víctimas, en una similar proporción son afectados en el departamento del Cauca los militares (50%) y los civiles (49%); sin embargo, desde 1999 la afectación de los civiles ha venido disminuyendo alcanzando en el 2003 su menor nivel con 31% (3 heridos y 5 muertos).

De los 41 municipios que integran el departamento de Cauca, Santa Rosa es el municipio más afectado por estos artefactos durante el periodo considerado con un 18% de los eventos (14 accidentes y 9 incidentes), le sigue Cajibío con 11% (4 accidentes y 10 incidentes), San Sebastián con 9% (6 accidentes y 6 incidentes) y La Vega con 6% (6 accidentes y 2 incidentes). 3 de estos municipios se encuentran en el sur y la Bota Caucana, zona de retaguardia de la insurgencia donde tradicionalmente han tenido presencia frentes del Eln y las Farc. Así mismo, con el propósito de copar el Macizo, las Farc han recurrido al minado de los accesos estratégicos, entre los cuales se cuenta el camino entre La Sierra y San Sebastián para impedir que el recientemente creado Batallón de Alta Montaña tapone uno de sus principales corredores estratégicos.

de un nuevo desplazamiento, conforme a las advertencias dadas a conocer por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (ACIN).







# SINOPSIS

***Es importante destacar cómo mientras a nivel nacional las tendencias actuales muestran que las acciones de la guerrilla bajan mientras que las de la Fuerza Pública las superan ampliamente, en Cauca las acciones siguen aumentando y superan los contactos armados.***

**E**n el Cauca la actividad militar de las guerrillas data de los años sesenta, cuando las Farc se tomaron el municipio de Inzá, en el nororiente del departamento. El conflicto armado hasta 1990 está determinado en lo fundamental por el accionar del M-19 y el Quintín Lame, mientras que a partir de 1991 el mayor protagonismo armado corre por cuenta de las Farc que mantuvo un nivel sostenido hasta 1999. A partir de este último año a la intensificación de los hechos atribuidos a las Farc se le sumó un incremento en el accionar del Eln. En los dos últimos años se producen niveles mucho más elevados en la intensidad del conflicto que cualquiera de los que se habían registrado desde 1985.

La marcada intensificación del conflicto se ha producido como consecuencia de las acciones por iniciativa de las Farc y los combates y operaciones militares emprendidos por la Fuerza Pública en particular contra esta guerrilla. El accionar de los grupos de autodefensa, así como la constante ofensiva de la Fuerza Pública, impactó de manera directa el accionar del Eln, bajando el número de eventos desarrollados por esta organización y obligándola a operar conjuntamente con las Farc. Es importante destacar cómo mientras a nivel nacional las tendencias actuales muestran que las acciones de la guerrilla bajan mientras que las de la Fuerza Pública las superan ampliamente, en Cauca las acciones de los grupos ilegales siguen aumentando y superan los contactos armados.

Luego de producirse la ruptura de los diálogos de paz en la administración Pastrana y ante la transformación de las capacidades militares del Estado, las Farc para evitar su derrota deciden posponer sus aspiraciones de lograr mayor dominio territorial, optando por asegurar su presencia en las zonas de implantación histórica y retomar el modo de operar característico de la guerra de guerrillas. Todo esto se expresa en el Cauca a partir de 2003 en el propósito de copar el Macizo y el sur del departamento recurriendo al minado de los accesos estratégicos y en la realización de un número creciente de



acciones ejecutadas por pequeñas unidades, con lo cual se busca asumir mínimos costos militares. En consecuencia, la iniciativa armada de las Farc, más que expresarse en acciones de grandes proporciones, se dirige a golpear a la Fuerza Pública a través de la realización de hostigamientos, ataques a instalaciones y emboscadas.

Una serie de hechos violentos ocurridos a partir de 2000 y con mayor intensidad en 2001 en municipios del norte y





centro del departamento, indican que las Autodefensas Unidas de Colombia también se encuentran librando una intensa lucha contra las Farc y el Eln por el control territorial de esta zona, que se expresa en asesinatos selectivos, masacres, amenazas y el desplazamiento de pobladores y comunidades indígenas y afrocolombianas. En el trasfondo de la disputa se encuentran el control por los cultivos ilícitos de coca y amapola; así como la lucha por corredores estratégicos. El departamento cuenta con la presencia de la insurgencia desde sus orígenes y en la últimas dos décadas con el narcotráfico y los grupos de autodefensa. En consecuencia, un territorio en disputa, con riesgos crecientes para la población y una dinámica que conduce a la intensificación de la guerra, con todo lo que esto implica para los no combatientes.

El escalamiento del conflicto armado y las manifestaciones de violencia entre 1999 y 2002, que golpearon con especial fuerza a la población indígena y a las autoridades tradicionales y locales, produjeron múltiples manifestaciones de resistencia y la activación de mecanismos de defensa como la Guardia Indígena. Entre los hechos que generaron mayor conmoción cabe destacar la masacre de 40 pobladores en la zona del Río Naya en los límites entre los departamentos de Cauca y Valle, cometida por el bloque Farallones de las Auc en abril de 2001, en represalia por la supuesta colaboración de los habitantes de la zona con la columna del Eln que había realizado varios secuestros colectivos en el departamento del Valle.

Pese a la clara intención de las Farc de atacar las poblaciones del norte del Cauca a partir de 2003, el rechazo de la comunidad a través de la resistencia civil a las acciones hostiles de la guerrilla no ha tenido el protagonismo del periodo 1999-2002. Las protestas ahora se dirigen principalmente contra la Fuerza Pública por las muertes de indígenas y por las ordenes de captura expedidas contra algunos dirigentes, tal y como se conoció después de la reunión de gobernadores Páez que hacia mediados de mayo de 2004 deliberó en el resguardo de Bodega en torno al recrudescimiento de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las Farc.

No se puede pasar por alto como factor que puede haber incidido en el cambio en la actitud de las comunidades, la fuerte intimidación que la guerrilla ha ejercido desde el mismo momento en que se producen las primeras manifestaciones de resistencia pacífica. En efecto, una semana después de que 4.000 integrantes de los cabildos del norte del Cauca expulsaran a los integrantes de una columna del frente 6 de

las Farc que pretendían incorporarse a un movimiento de protesta en Piendamó, la misma columna en los primeros días de junio de 1999 se tomó en represalia la población de Toribío quedando parcialmente destruida. La intensificación a partir de marzo de 2002 de la violencia dirigida contra líderes indígenas se produce inmediatamente después del momento de mayor activismo del movimiento de resistencia pacífica.

Las zonas donde el conflicto y la violencia han registrado mayor intensidad corresponden a las que poseen un alto valor estratégico, donde las guerrillas buscan mantener su presencia ante el firme propósito de las autodefensas de desterrarlas, mientras que la Fuerza Pública despliega su acción legítima contra los grupos ilegales para recuperar el control sobre estos territorios. En el norte del departamento, la geografía montañosa ha facilitado la movilización de los grupos armados ilegales, que por ejemplo a través de la zona del Alto Naya en el municipio de Buenos Aires han establecido un corredor hacia el puerto de Buenaventura en el departamento del Valle. De otro lado, se encuentra el corredor que comunica los municipios de Caloto, Corinto y Miranda con el departamento del Tolima, el interior del país y los Llanos Orientales. En el centro del Cauca la acción de las autodefensas ha tenido epicentro en Popayán, centro urbano que ha sido escenario de las acciones de “limpieza social” y la influencia por parte de estos grupos ha ido en ascenso gracias a la cercanía con municipios como Timbío y El Tambo donde su presencia es ostensible. En el sur la topografía ha permitido la delimitación de los territorios entre las guerrillas y las autodefensas, mientras que las primeras ocuparon las zonas de montaña y se replugaron hacia las poblaciones del municipio de Patía, las segundas se asientan en las cabeceras municipales y tienen influencia en los valles y las partes planas.

La implementación de la Política de Seguridad Democrática por parte del Gobierno nacional se expresa en una muy importante disminución de los homicidios, asesinatos selectivos y masacres que dan cuenta de las mayores garantías de protección y seguridad de las comunidades; así como en la reducción de los ataques a las poblaciones y los retenes ilegales en la vía Panamericana. Dentro de los principales logros también está haber restablecido la gobernabilidad democrática que se vio seriamente amenazada por la campaña de intimidación de las Farc, gracias a que la Policía, hoy presente en todas las cabeceras municipales, garantiza la seguridad a los gobiernos locales.

